**INFORME II:
¿POR QUÉ LA DECISIÓN PRELIMINAR
DE FECHA 6 DE ABRIL DE 2023,
DICTADA POR LA CORTE INTERNACIONAL
DE JUSTICIA EN EL CASO REPÚBLICA
COOPERATIVA DE GUYANA VS REPÚBLICA
BOLIVARIANA DE VENEZUELA,
ES GRAVEMENTE CONTRARIA A DERECHO Y,
EN CONSECUENCIA, PERJUDICIAL
A VENEZUELA?**

MOISÉS TROCONIS VILLARREAL*

* Ex Magistrado y ex Presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

INTRODUCCIÓN

Este Informe tiene por objeto dar cuenta resumida de las razones demostrativas de que es procesalmente válido sostener que la decisión preliminar dictada por la Corte Internacional de Justicia (Corte) en fecha 6 de abril de 2023, en el caso República Cooperativa de Guyana (Guyana) vs República Bolivariana de Venezuela (Venezuela), es gravemente contraria a derecho y, en consecuencia, perjudicial a Venezuela. El análisis de esta decisión y la exposición resumida de sus infracciones principales son precedidos por un resumen del proceso judicial en curso ante la Corte y seguidos por unas consideraciones adicionales y unas conclusiones parciales.

I. DEL CONTEXTO

1. En fecha 29 de marzo de 2018, Guyana demandó a Venezuela y, en el Capítulo I de su escrito, solicitó principalmente a la Corte que confirmara la validez legal y el efecto vinculante del Laudo relativo a la frontera entre la Colonia de Guyana Británica y los Estados Unidos de Venezuela, del 3 de octubre de 1899 (Capítulo I, párrafo 1); luego, en el Capítulo IV de dicho escrito, solicitó principalmente a la Corte que declarase que el Laudo de 1899 es válido y vinculante para Guyana y Venezuela, y que la frontera establecida por ese Laudo y el Acuerdo de 1905 es válida y vinculante para Guyana y Venezuela (Capítulo IV, párrafo 55 a).

2. En fecha 18 de diciembre de 2020, la Corte Internacional de Justicia se declaró provista de jurisdicción [competencia] para conocer de la demanda presentada por Guyana en lo que concierne a la validez del Laudo Arbitral del 3 de octubre de 1899 y a la cuestión vinculada de la

resolución definitiva de la controversia sobre la frontera terrestre entre Guyana y Venezuela, y desprovista de jurisdicción [competencia] para conocer de las reclamaciones de Guyana surgidas de acontecimientos ocurridos después de la firma del Acuerdo de Ginebra.

3. En fecha 7 de junio de 2022, Venezuela presentó escrito razonado mediante el cual denunció, a título de excepción preliminar, y con fundamento en el artículo 79 bis del Reglamento de la Corte, la inadmisibilidad de la demanda de Guyana a causa de su falta de legitimación para la causa, visto que no fue parte del Tratado de Washington de 1897 que derivó en el Laudo de 1899 ni participó en las tareas de demarcación de la frontera, puesto que no existía como Estado soberano sino como colonia de la Corona Británica; también objetó que el proceso continuara en ausencia del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda (Reino Unido) y que la Corte se pronunciara en su ausencia sobre el Laudo, por cuanto el Reino Unido fue parte necesaria en el compromiso arbitral, en el arbitraje que condujo al Laudo, en la Comisión de Demarcación y en el Acuerdo de Ginebra.

4. En apoyo jurisprudencial a la tesis invocada en la excepción según la cual el proceso judicial en curso ante la Corte no debía continuar en ausencia del Reino Unido, por cuanto la Corte no debía decidir sobre la legalidad de la conducta de un Estado que no ha sido parte ni ha consentido en la competencia de la Corte, Venezuela invocó principalmente los casos *Monetary Gold*, *East Timor* y *Croatian Genocide*.

5. En resumen, Venezuela denunció que Guyana carece de *ius standi* para pedir a la Corte que confirme y declare la validez del Laudo Arbitral de 3 de octubre de 1899, y alegó que el Reino Unido es una parte esencial, necesaria e indispensable del procedimiento, sin la cual éste no debe continuar, pues la legalidad de la conducta del Reino Unido forma parte del objeto de la controversia.

6. En fecha 15 de julio de 2022, Guyana presentó observaciones escritas sobre las excepciones preliminares opuestas por Venezuela.

Guyana alegó que lo que interesa no es si el Reino Unido fue parte o no del procedimiento arbitral de 1899 sino si sus intereses legales constituyen el objeto mismo de la controversia sobre la validez del Laudo Arbitral; que Venezuela no identificó los particulares intereses

del Reino Unido que pudieran ser afectados por la decisión de la Corte ni planteó que tales intereses fuesen el objeto mismo de la controversia; que el Reino Unido no tiene interés legal en la validez del Laudo Arbitral de 1899 o en el arreglo definitivo de la frontera terrestre entre Guyana y Venezuela, ni en el objeto principal de esta controversia ni en la resolución de este asunto, por cuanto dicha resolución puede afectar solamente la disposición del territorio reclamado por Guyana y Venezuela, ya que el Reino Unido renunció a toda reclamación cuando su relación colonial terminó y Guyana llegó a ser un Estado independiente en mayo de 1966.

7. Según Guyana, al pronunciarse la Corte sobre la validez del Laudo de 1899 o sobre el arreglo definitivo de la frontera terrestre, no hay derechos u obligaciones del Reino Unido que pudieran resultar afectados; por lo tanto, tomando en cuenta el Monetary Gold case y la jurisprudencia posterior, no hay base para que la Corte decline el ejercicio de su jurisdicción en este caso a causa de la ausencia del Reino Unido.

8. En fecha 6 de abril de 2023, la Corte dictó la decisión preliminar mediante la cual juzgó admisible “la excepción preliminar” (sic) planteada por Venezuela, la rechazó luego en su fundamento, y declaró que la Corte podía juzgar sobre el mérito de las reclamaciones de la República Cooperativa de Guyana en la medida de su correspondencia con el alcance del párrafo 138, subpárrafo 1, de la decisión del 18 de diciembre de 2020, en el cual la Corte se declara competente para conocer de la demanda de Guyana en lo que concierne a la validez del Laudo Arbitral del 3 de octubre de 1899 y la cuestión relacionada del arreglo definitivo de la controversia entre Guyana y Venezuela.

9. Según la conclusión de la Corte, el Reino Unido, por haber sido parte del Acuerdo de Ginebra, aceptó que la controversia entre Guyana y Venezuela podía ser resuelta por uno de los medios establecidos en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, y aceptó también que él no tendría papel que cumplir en este procedimiento.

10. En la parte motiva de su decisión, la Corte señaló residualmente que si, en su decisión sobre el mérito, fuera llamada a pronunciarse sobre cierta conducta imputable al Reino Unido, lo que no podía determinar en esa oportunidad, esto no impediría que ejerciera su competencia, basada ésta en la aplicación del Acuerdo de Ginebra.

II. DE LA DECISION PRELIMINAR

11. El texto de la decisión de la Corte, de fecha 6 de abril de 2023, mediante la cual rechazó las excepciones preliminares opuestas por Venezuela, consta de 108 párrafos y se halla compuesta por las siguientes partes:

Una parte narrativa, integrada por una cronología del proceso judicial en curso (párrafos 1 a 26), una mención breve de Guyana (párrafo 28), una referencia menor a los fundamentos fácticos e históricos del caso (párrafo 29), y una referencia mayor al Tratado de Washington de 1897 y al Laudo de 1899 (párrafos 30 a 33), al rechazo de Venezuela del Laudo de 1899 y a la búsqueda de una solución de la controversia (párrafos 34 a 38), a la firma del Acuerdo de Ginebra (párrafos 39 a 43) y a la implementación de dicho Acuerdo (párrafos 44 a 52).

Una parte motiva destinada al examen de admisibilidad de la “excepción preliminar” de Venezuela (párrafos 53 a 74).

Una parte motiva destinada al examen de fondo de la “excepción preliminar” de Venezuela (párrafos 75 a 107).

Y la parte dispositiva denominada cláusula operativa (párrafo 108).

12. En el texto descrito se observa que la Corte desarrolla la parte narrativa de su decisión desde el párrafo 1 hasta el párrafo 26 (primer segmento) y lo continúa desde el párrafo 28 hasta el 52 (segundo segmento), pero intercala el párrafo 27 como si formara parte de dicha narrativa. No es así. El párrafo citado contiene un juicio de valor determinante en el tratamiento de las excepciones preliminares opuestas por Venezuela, razón por la cual no debió formar parte de la narrativa, donde pudo pasar por desapercibido, sino del encabezamiento de la parte motiva de la decisión.

El citado párrafo 27 será objeto de consideración posterior.

13. En su decisión, la Corte transcribe las peticiones de la demanda de Guyana y las de sus escritos de fondo y de observaciones a las excepciones preliminares opuestas por Venezuela; en lo que concierne a Venezuela, solamente transcribe las peticiones contenidas en su escrito de excepciones preliminares, de fecha 7 de junio de 2022; finalmente, transcribe las peticiones formuladas por Venezuela y Guyana en la fase oral del procedimiento incidental.

14. Es de observar que, en su demanda, Guyana se refiere varias veces al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, identificándolo como parte del Laudo de 1899, cuya validez o nulidad plantea como el objeto de la controversia, e identificándolo igualmente como parte del Acuerdo de Ginebra, en el cual funda la Corte su competencia para conocer de la controversia sobre el Laudo, razones por las cuales no cabe duda de que no se trata de un sujeto de Derecho Internacional cualquiera, sino de uno relacionado, en relación de interés directo, con la controversia y, por tanto, con derecho a comparecer ante la Corte.

15. En efecto, el Estatuto de la Corte prescribe que el Secretario debe comunicar la demanda a todos los interesados (“to all concerned”) (artículo 40.2), así como también a cualquier otro Estado con derecho a comparecer ante la Corte (“any other states”) (artículo 40.3).

16. Sin embargo, no consta que la Corte, ni en su decisión de fecha 18 de diciembre de 2020 ni en ninguna otra, haya ordenado remitir copia de la demanda al Reino Unido, ni que el Secretario haya cumplido con su deber expreso de comunicarle dicho escrito, a pesar de la relación documentada del Reino Unido con el objeto de la controversia, razón por la cual es posible afirmar que la Corte incurrió en la infracción de la citada norma estatutaria.

Esta negativa primera de la Corte, de comunicar la demanda de Guyana al Reino Unido, formará parte de una consideración posterior.

17. La Corte precisa que el Acuerdo de Ginebra (Acuerdo) prevé el establecimiento de una Comisión Mixta (artículo I), compuesta por representantes designados por el Gobierno de Guayana Británica y el Gobierno de Venezuela (artículo II), para procurar una solución de la controversia entre las partes, pero silencia que el establecimiento de la Comisión Mixta fue una decisión de los Gobiernos de Venezuela y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en consulta con el gobierno de la Colonia.

18. Y cuando refiere que el encargo de la Comisión era procurar una solución de la controversia entre las partes, la Corte no precisa que, según el artículo I del Acuerdo, no se trata de una controversia entre Venezuela y Guayana Británica o entre Venezuela y Guyana, sino entre Venezuela y el Reino Unido.

Por tanto, las partes en controversia que suscribieron el Acuerdo de Ginebra fueron Venezuela, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y una de las colonias del Reino Unido, la de Guayana Británica; la República Cooperativa de Guyana no lo suscribió por cuanto no existía para entonces ni como Estado ni como sujeto de Derecho Internacional, de modo que no cabe atribuir a la voluntad de la República Cooperativa de Guyana ninguna de las disposiciones de dicho Acuerdo del cual se hará parte tres meses después de su entrada en vigencia.

19. Ni Guyana ni el Gobierno de Guyana aparecen en el encabezamiento del Acuerdo de Ginebra; tampoco en sus artículos I, II o III; el Gobierno de ese Estado aparece referido por primera vez en el artículo IV del Acuerdo, para obrar a partir del año 1970, es decir, cuatro años después de su independencia, como receptora, junto con Venezuela, del Informe final de la Comisión Mixta, y como encargada, junto con la misma Venezuela, de escoger uno de los medios de solución pacífica previstos en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas y, en su defecto, de referir la decisión sobre los medios de solución a un órgano internacional apropiado que ambos Gobiernos acuerden y, en su defecto, de referir dicha decisión al Secretario General de las Naciones Unidas.

20. Ni Guyana ni el Gobierno de Guyana aparecen en la que denominamos “Cláusula Interpretativa del Acuerdo”, prevista en el artículo V (1), establecida por y vinculante para Venezuela y el Reino Unido o Guayana Británica en relación *in concreto* con “cualesquiera bases de reclamación de soberanía territorial en los Territorios de Venezuela o Guayana Británica o de cualesquiera derechos que se hubiesen hecho valer previamente, o de reclamaciones de tal soberanía territorial o ... de un derecho a reclamo o base de reclamo por cualquiera de ellos sobre tal soberanía territorial” (subrayados añadidos).

Según este artículo V (1), “... nada de lo contenido en este Acuerdo será interpretado como una renuncia o disminución por parte de Venezuela, el Reino Unido o la Guayana Británica ...” de las citadas bases de reclamación de soberanía en sus territorios (subrayado añadido).

21. Ni Guyana ni el Gobierno de Guyana aparecen en la que denominamos “Cláusula de Prohibición de Innovar”, prevista como regla en el artículo V (2) del Acuerdo, según la cual “Ningún acto o actividad

que se lleve a cabo mientras se halle en vigencia este Acuerdo constituirá fundamento para hacer valer, apoyar o negar una reclamación de soberanía territorial en los Territorios de Venezuela o la Guayana Británica, ni para crear derechos de soberanía en dichos Territorios ...”.

El Gobierno de Guyana solamente aparece en el enunciado de la excepción según la cual tales actos o actividades podrán servir de fundamento para hacer valer, apoyar o negar una reclamación de soberanía territorial “cuando ... sean resultado de cualquier convenio logrado por la Comisión Mixta y aceptado por escrito por el Gobierno de Venezuela y el Gobierno de Guyana” (subrayados añadidos).

22. Puesto que la citada Comisión Mixta cesó en sus funciones y de ella no derivó convenio alguno, la excepción prevista en el artículo V (2) no se configuró y, por tanto, la regla constituida por la Cláusula de Prohibición de Innovar ha permanecido en pie.

23. Es el caso que consta en el texto de su demanda que Guyana ha pedido a la Corte que confirme o declare, entre otros puntos, que la frontera establecida por el Laudo de 1899 y el Acuerdo de 1905 es válido y vinculante para Guyana y Venezuela, y que aquella posee soberanía plena sobre el territorio entre el Río Esequibo y la frontera establecida por el Laudo de 1899 y el Acuerdo de 1905.

Ahora bien, la demanda de Guyana configura un acto jurídico unilateral que, en su fundamento y en su petición principal, pretende que la Corte niegue la reclamación de soberanía territorial planteada por Venezuela y que diera lugar al Acuerdo de Ginebra, acción y efecto que prohíbe la Cláusula en referencia.

24. En efecto, presentada dicha demanda en vigencia del Acuerdo de Ginebra, la misma incurre en la prohibición de innovar que consagra el Acuerdo, pues nada impide interpretar que la expresión utilizada en su artículo V (2), “Ningún acto o actividad ...” (subrayado añadido), abarca no sólo los actos puramente materiales sino también los jurídicos que constituyan manifestaciones de voluntad de un sujeto de Derecho, en ejercicio de su capacidad de obrar, como es el caso de la demanda o reclamación de soberanía territorial de la República Cooperativa de Guyana.

La Cláusula citada completa la prohibición en los términos siguientes: “Ninguna nueva reclamación o ampliación de una reclama-

ción existente a soberanía territorial en dichos territorios será hecha valer mientras este Acuerdo esté en vigencia, ni se hará valer reclamación alguna sino en la Comisión Mixta mientras tal Comisión exista” (subrayados añadidos).

25. Es el caso que la única nueva reclamación presentada después de la entrada en vigencia del Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966, y que procura en definitiva surtir efectos de soberanía en los territorios de Venezuela o de la antigua Colonia de Guyana Británica, es la que contiene la demanda de Guyana del 29 de marzo de 2018, reclamación que el Acuerdo prohíbe expresamente; y es también el caso que la Comisión Mixta, ante la cual se pudo hacer valer cualquier otra reclamación, dejó de existir.

26. Cabe agregar desde ya que la expresión “Laudo arbitral de 1899” no aparece en el encabezamiento del Acuerdo de Ginebra, ni en sus artículos II, III, IV, V, VI, VII u VIII; la expresión aparece mencionada únicamente en el artículo I, y no como objeto de regulación normativa sino por referencia; en cambio, los artículos V (1) y V (2) establecen como objeto de regulación normativa, expresa y directa, las reclamaciones de soberanía territorial en los territorios de Venezuela o de Guayana Británica.

Estas precisiones serán objeto de consideración posterior.

27. La Corte señala en su decisión que el artículo IV, párrafo 1, del Acuerdo de Ginebra, establece que, en caso de que la Comisión Mixta falle en su cometido, los Gobiernos de Guyana y Venezuela deben seleccionar uno de los medios de solución pacífica previstos en el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas.

En concreto, el artículo IV (1) especifica que, si dentro de un plazo de cuatro años, contados a partir de la fecha del Acuerdo, la Comisión Mixta “no hubiere llegado a un acuerdo completo para la solución de la controversia, referirá al Gobierno de Venezuela y al Gobierno de Guyana ... cualesquiera cuestiones pendientes. Dichos Gobiernos escogerán sin demora uno de los medios de solución pacífica previstos en el Artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas” (subrayados añadidos).

Cabe interpretar la disposición citada en el sentido de que, integrada la controversia prevista en el Acuerdo para su resolución por varias cuestiones, en caso de que aquella no hubiese sido resuelta por la

Comisión Mixta mediante un acuerdo completo, perfecto, que hubiese solucionado todas ellas, lo que procedía era que la Comisión refiriera, a los Gobiernos de Venezuela y Guyana, aquellas cuestiones integrantes de la controversia que hubiesen quedado pendientes de resolución.

28. La Corte agrega que, de conformidad con el artículo IV, párrafo 2, del Acuerdo, en el caso de que estos Gobiernos no hubiesen llegado a un acuerdo, la decisión sobre los medios de solución sería tomada por un órgano internacional apropiado en el cual ambos estén de acuerdo o, en su defecto, por el Secretario General de las Naciones Unidas; y que, en efecto, el Secretario General seleccionó el proceso de los buenos oficios como el medio apropiado de solución pacífica.

29. Cabe aclarar desde ya que las partes no llegaron a un acuerdo respecto a la elección de uno de los medios de solución previstos en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, ni tampoco a uno sobre el órgano internacional apropiado a cargo de decidir sobre uno de tales medios de solución, y que únicamente convinieron en referir esta decisión al Secretario General de las Naciones Unidas; y cabe precisar igualmente que el Secretario General de la ONU convino en hacer la escogencia del medio solicitada por las partes, pero erró en la selección primera que hizo porque no escogió ninguno de los medios estipulados expresamente en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, sino el de buenos oficios, mecanismo que, además, no es un medio de solución de controversias internacionales sino de aproximación de las partes en conflicto..

30. En resumen, los Gobiernos de Venezuela y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte acordaron, a través de los artículos I y IV del Acuerdo, establecer la naturaleza de la solución pacífica de la controversia sobre la frontera entre Venezuela y Guyana Británica, localizar los medios de solución pacífica de dicha controversia (artículo 33 de la Carta de la Organización de Naciones Unidas) y regular el procedimiento para la escogencia de uno de tales medios de solución, haciendo mención expresa de los sujetos a cargo de la escogencia. Y, sin duda, se trata de un acuerdo a propósito de la controversia sobre la frontera terrestre entre los Estados en referencia, no sobre la validez de un laudo arbitral.

31. En lo que concierne a la naturaleza de la solución, el artículo I del Acuerdo dispone expresamente que ha de ser un “arreglo práctico” (subrayado añadido), para alcanzar el cual han de procurarse soluciones satisfactorias; el Tercer Considerando anticipa que cualquier controversia pendiente debe ser “amistosamente resuelta en forma que resulte aceptable para ambas partes” (subrayado añadido), y el artículo IV (1) agrega que debe alcanzarse “un acuerdo completo” (subrayado añadido) para la solución de la controversia.

32. De la consideración que antecede se desprende que el Acuerdo de Ginebra consagra expresamente el “arreglo práctico” (subrayado añadido) como la solución específica para la controversia sobre la frontera que se halla pendiente entre Venezuela y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, solución que ha de alcanzarse a través de un “acuerdo completo” y en forma que resulte aceptable para ambas partes. De esta disposición normativa se desprende que el tratado bilateral en referencia no establece ni regula, ni expresa ni tácitamente, otro tipo de arreglo u otro tipo de solución para dicha controversia, y que el mecanismo de solución pacífica que se determine ha de procurar exclusivamente la consecución del citado tipo de arreglo.

33. Antes del artículo IV citado por la Corte, la palabra “controversia” aparece en el Encabezamiento del Acuerdo de Ginebra (“ACUERDO PARA RESOLVER LA CONTROVERSIA ENTRE VENEZUELA Y EL REINO UNIDO DE GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORTE SOBRE LA FRONTERA ENTRE VENEZUELA Y GUYANA BRITÁNICA”), en el Prólogo (“El Gobierno de Venezuela y el del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ... han llegado al siguiente Acuerdo para resolver la presente controversia”), en su Cuarto Considerando (“Convencidos de que cualquiera controversia pendiente ... debe ... ser amistosamente resuelta en forma que resulte aceptable para ambas partes”) y en su artículo I (“Se establece una Comisión Mixta con el encargo de buscar soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia ...); después del artículo IV (1), la palabra aparece dos veces más, en el artículo IV (2) (Si los medios escogidos no conducen a una solución de la controversia ... dicho órgano, o como puede ser el caso, el Secretario General de las Naciones Unidas, escogerán otro de los medios estipulados en el Artículo 33 de la Carta de las

Naciones Unidas, y así sucesivamente hasta que la controversia haya sido resuelta ...”) (subrayados añadidos).

34. El Acuerdo alude también a una palabra de significado próximo pero distinto al de controversia: la de “contención” (en la versión inglesa: *contention*; en la versión francesa: *position*). Mientras “controversia” aparece siete veces, la palabra “contención” aparece mencionada una sola vez, en uno de los ocho artículos del Acuerdo y en una sola de sus más de ochenta líneas, en los términos siguientes: “Artículo I. Se establece una Comisión Mixta con el encargo de buscar soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia entre Venezuela y el Reino Unido surgida como consecuencia de la contención (posición) venezolana de que el Laudo arbitral de 1899 sobre la frontera entre Venezuela y Guyana Británica es nulo y sin efecto” (subrayado añadido).

35. Es de observar que el Artículo I del Acuerdo distingue entre “controversia” y “contención”, es decir, entre la contraposición de intereses de las dos partes en conflicto sobre la frontera entre ellas (Venezuela y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) y la posición adoptada por una de ellas (Venezuela) sobre el Laudo de 1899; que, cuando la disposición citada alude a “controversia”, se refiere, según el Encabezamiento del Acuerdo, a la existente entre Venezuela y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre la frontera entre Venezuela y la antigua Colonia de Guyana Británica; que, respecto a dicha “controversia”, la disposición trata directamente de la necesidad de su arreglo práctico y del encargo de buscar soluciones satisfactorias en el arreglo; que, en cambio, cuando alude a “contención” la trata solamente por referencia, para informar de la “posición” sostenida por la parte venezolana sobre el Laudo arbitral de 1899, y para dar cuenta de que la controversia entre Venezuela y el Reino Unido sobre la frontera entre Venezuela y Guyana Británica surgió y, podría agregarse, continúa pendiente, como consecuencia de la “posición” venezolana sobre el Laudo de 1899, pues el cuarto Considerando del Acuerdo de Ginebra se refiere a “cualquiera controversia pendiente entre Venezuela por una parte, y el Reino Unido y Guyana Británica por la otra”, a que el Acuerdo es “para resolver la presente controversia”, y a que la controversia que se halle pendiente “debe, por consiguiente, ser amistosamente resuelta en forma que resulte aceptable para ambas partes”, y el artículo IV (2) precisa

que, de no llegarse a un acuerdo completo, debían referirse a Venezuela y Guyana cualesquiera “cuestiones pendientes” (subrayados añadidos).

36. No hay pues razón alguna para confundir “controversia” y “contención” (“posición”), visto que, en el contexto del artículo I del Acuerdo, es indudable que la primera posee alcance bilateral (“controversia entre Venezuela y el Reino Unido”) y la segunda unilateral (posición o contención “venezolana”), ni para interpretar que, donde el Acuerdo dice “controversia”, quiere decir “contención” (“posición”), ni menos aún para interpretar que, donde el Acuerdo dice “contención” (“posición”), quiere decir “controversia”. Por tanto, tampoco hay razón alguna para interpretar que, donde el Acuerdo dice “controversia sobre la frontera”, quiere decir “posición (contención) sobre el laudo”, y mucho menos para interpretar que, donde dice “posición (contención) sobre el laudo”, quiere decir “controversia sobre la frontera”.

En cambio, la Corte, a los fines de justificar su competencia para conocer y decidir la demanda de Guyana, ha optado por no distinguir entre las dos nociones que cita el Acuerdo de Ginebra en su artículo I, sino por confundirlas: en efecto, en su decisión del 18 de diciembre de 2020, la Corte interpretó que el Acuerdo usa el término “controversia” como sinónimo de la palabra “disputa”, y que ésta expresa un desacuerdo sobre un punto de hecho o de derecho, un conflicto de puntos de vista o de intereses entre dos personas (párrafo 64), mientras que la palabra “contención” indica un desacuerdo entre las partes y se refiere a puntos de vista opuestos entre las partes del Acuerdo, es decir, remite a conflicto de puntos de vista entre las partes (párrafo 129).

Ahora bien, en el documento de su autoría denominado “Practice Directions”, la Corte atribuye a la palabra “contención”, desde el 13 de diciembre de 2006, un significado distinto al de desacuerdo o contraposición de puntos de vista: en efecto, en el Artículo IXbis.1 del documento citado, la Corte dispone que: “*Any recourse to Article 56, paragraph 4 of the Rules of Court, is not to be made in such a manner as to undermine the general rule that all documents in support of a party’s contentions shall be annexed to its written pleadings of produced in accordance with Article 56, paragraphs 1 and 2, of the Rules of Court*”, donde es evidente que la palabra “contención” se refiere a los

argumentos y, en definitiva, a la posición de una parte, no a los puntos de vista opuestos de dos partes.

Por tanto, la tesis de la Corte, en lo que concierne al uso de la palabra “contención” en el contexto del Acuerdo de Ginebra, además de ser inconsistente con el significado y uso que hace de ella en el citado documento denominado “Practice Directions”, conduce a que la diferenciación que se hace en el Acuerdo entre las palabras “controversia”, de alcance bilateral, y “contención”, de alcance unilateral, pierda toda utilidad y sentido, lo que no pudo ser el propósito de las partes del Acuerdo.

37. Desde luego, no consta en disposición alguna del Acuerdo de Ginebra la voluntad concorde de las partes de convertir la contención, es decir, la posición venezolana sobre el Laudo, en controversia, ni de sustituir el objeto de la controversia de que trata expresamente el Acuerdo, es decir, la frontera entre Venezuela y la antigua Colonia de Guyana Británica, por la contención venezolana sobre el Laudo de 1899, ni de atribuir competencia a la Corte para tomar conocimiento de dicha contención y decidir sobre ella.

38. Por tanto, la controversia pendiente y presente para el 17 de febrero de 1966, fecha de la firma y entrada en vigencia del Acuerdo, entre Venezuela y el Reino Unido, era y es la que tiene por objeto la frontera citada, no la cuestión de la validez o nulidad del Laudo de 1899, introducida por Guyana el 29 de marzo de 2018.

39. Por otra parte, no nos detendremos en las controversias que, a la luz del artículo V del Acuerdo, pudieran suscitarse en su seno en caso de que, por ejemplo, Venezuela o el Reino Unido realizasen, en vigencia de aquél, actos que sirviesen de fundamento para hacer valer, apoyar o negar una reclamación de soberanía territorial en los territorios de Venezuela o de la antigua Colonia de Guyana Británica, o para crear derechos de soberanía en dichos territorios, o en caso de que formularsen una nueva reclamación de soberanía sobre dichos territorios o de que ampliaran una ya existente (artículo V.2); sin embargo, es de hacer notar que las controversias que esta disposición anticipa y previene son las que pudiesen surgir como consecuencia de la realización de actos futuros o de la formulación de reclamaciones nuevas, por parte de Venezuela o del Reino Unido, sobre cuestiones de soberanía territorial en

los territorios de Venezuela o Guyana Británica, no como consecuencia de posiciones unilaterales sobre actos antiguos o pasados.

40. Y es del caso poner de relieve que los contenidos del Acuerdo de Ginebra fueron acordados por las partes a la vista de la independencia de Guyana Británica y de la existencia independiente de la República Cooperativa de Guyana: así se desprende, entre otros, del Segundo Considerando (“Considerando la próxima independencia de Guyana Británica”) y del artículo VIII (“Al obtener Guyana Británica su Independencia, el Gobierno de Guyana será en adelante parte del presente Acuerdo”); en efecto, el hecho cierto de la existencia independiente de la República Cooperativa de Guyana condujo a que los Gobiernos de Venezuela y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte la reconocieran como parte del Acuerdo desde entonces, y le asignaran en el propio texto, por anticipado, la tarea principal de participar en el procedimiento de escogencia de los medios de solución pacífica de la “controversia” entre Venezuela y el Reino Unido sobre “la frontera”; pero el hecho cierto de la independencia no le otorgó a Guyana la facultad de representar al Reino Unido en el Acuerdo, ni de sustituir su voluntad en dicha “controversia” y, desde luego, no consta en el Acuerdo ni en ningún instrumento posterior que la independencia de Guyana hubiese dado lugar o hubiese conducido a la alteración, a la reforma o a la derogación de sus contenidos.

41. Las consideraciones que anteceden sirven de base para sostener que la “controversia”, cuyo procedimiento para la escogencia entre los varios medios de solución regula y cuya solución única consagra el Acuerdo, es aquella cuyo objeto único convinieron en identificar las partes en el texto mismo de su encabezamiento, así: “ACUERDO PARA RESOLVER LA CONTROVERSIA ENTRE EL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE SOBRE LA FRONTERA ENTRE VENEZUELA Y GUYANA BRITÁNICA” (subrayados añadidos); que para la fecha del Acuerdo, se trataba de la única controversia presente, pendiente, para cuya solución debía llegarse a un acuerdo completo, y que debía ser resuelta de forma que resultara aceptable para ambas partes; y que las otras controversias que el Acuerdo quiso prevenir eran y son únicamente las que podrían surgir como consecuencia de actos futuros, no de actos pasados o seculares, y sobre

cuestiones de soberanía territorial, no sobre la contención (posición) de una parte acerca de un acto antiguo como el Laudo de 1899.

42. Las citadas consideraciones también sirven de base para precisar que, según su Estatuto, la función de la Corte Internacional de Justicia es decidir de conformidad con el derecho internacional (artículo 38.1), razón por la cual es procesalmente válido sostener que dicha Corte carece de competencia funcional para decidir una controversia que, como la pendiente y presente entre Venezuela y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre la frontera entre Venezuela y la antigua Colonia de Guyana Británica, debe resolverse, no por aplicación de las normas del derecho internacional, es decir, no a través del ejercicio de la función normativa de la Corte, sino mediante la aplicación de un arreglo práctico que resulte aceptable para las partes, Venezuela y el Reino Unido, en acatamiento del mandato expreso contenido en el artículo I del Acuerdo de Ginebra, suscrito por ellas.

43. Cabe añadir que la Corte cuenta con la potestad estatutaria adicional de decidir *ex aequo et bono* (artículo 38.2), pero ocurre que, según la disposición citada, esta alternativa decisoria se halla condicionada a la existencia de un acuerdo entre las partes de la controversia, y es el caso que este acuerdo no existe.

44. La Corte destina los párrafos 1 a 26 (primer segmento) y 28 a 52 (segundo segmento) a exponer la parte narrativa de su decisión, es decir, a dar cuenta resumida del inicio y desarrollo del proceso en curso y de los antecedentes de la controversia que constituye su objeto. Sin embargo, intercala entre los párrafos 26 y 28 de la narrativa, sin explicación ni justificación alguna, un párrafo 27, utilizándolo para dictar una primera decisión sobre el tratamiento de las excepciones preliminares opuestas por Venezuela, en las circunstancias siguientes:

45. El escrito de las “excepciones preliminares a la admisibilidad de la demanda” de Guyana, presentado por Venezuela en fecha 7 de junio de 2022, incluye en su Tabla de Contenido un Capítulo V denominado “La Legitimación de la República Co-operativa de Guyana” y un Capítulo VI denominado “El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, una parte indispensable”.

46. En el citado Capítulo V de su escrito de excepciones, relativo a “La Legitimación de la República Co-operativa de Guyana”, Venezuela

denuncia que Guyana no fue parte del Tratado de Washington del 2 de febrero de 1897, entre el Reino Unido y la República de Venezuela, instrumento sobre la base del cual el tribunal arbitral fue establecido y el procedimiento del Laudo fue acordado; que Guyana tampoco participó en las tareas de demarcación de la frontera de conformidad con las previsiones del Laudo ni fue capaz de pronunciarse en los años siguientes sobre las vicisitudes del territorio en disputa; que la República Cooperativa de Guyana simplemente no existía, pues era para entonces una colonia de la Corona Británica (párrafo 36, pp. 6 y 7); que tampoco existía como Estado soberano para el 17 de febrero de 1966, fecha de la firma del Acuerdo de Ginebra; que no llegó a ser parte del Acuerdo por aplicación de las reglas relacionadas con la sucesión de Estados, sino por virtud del Artículo VIII del Acuerdo, por vía de agregación a las partes originales, Venezuela y el Reino Unido, y una vez alcanzada su independencia (párrafos 37 a 39, pp. 6 y 7); y que, por tanto, Guyana carece de legitimación (*ius standi*) para pedir a la Corte que declare la validez del Laudo arbitral del 3 de octubre de 1899, Laudo resultante de un proceso respecto al cual ha sido completamente ajena (párrafo 41, p. 7).

47. Los hechos negativos, constitutivos del fundamento de esta primera denuncia, relativa a la falta de legitimación de Guyana en la controversia sobre el Laudo de 1899, son incontrovertibles: la República Cooperativa de Guyana no puede ser parte de esa controversia y, por tanto, tampoco de la relación procesal iniciada a su respecto, porque no fue parte del Laudo, ni de la relación arbitral que antecedió al Laudo, ni del compromiso arbitral que fue la base de dicha relación, ni de la controversia entre Venezuela y el Reino de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en torno a la frontera entre Venezuela y la Colonia de Guyana Británica, que dio lugar a dicho compromiso, ni de la relación jurídica sustancial, de naturaleza territorial, constituida entre Venezuela y el Reino de Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, a propósito de la frontera en cuestión.

48. Se trata de una primera denuncia, constitutiva de una excepción de inadmisibilidad que, de hallarse fundada, debía impedir que Guyana continuase como parte en la controversia sobre el Laudo y en el proceso

en curso, por estar desprovista de legitimación sustancial, lo que debía hacer inadmisibile su demanda, inútil la continuación del proceso, inútil el tratamiento del mérito de la controversia e inútil el ejercicio, por parte de la Corte, de su competencia para conocer y decidir sobre el mérito de dicha controversia.

49. En el citado Capítulo VI de su escrito de excepciones, relativo a “El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, una parte indispensable”, Venezuela denuncia que el Reino Unido fue parte en el compromiso arbitral del 2 de febrero de 1897; fue parte en el arbitraje que condujo al Laudo del 3 de octubre de 1899; fue parte en la comisión constituida para la demarcación de la frontera establecida por el Laudo; fue parte en la negociación del Acuerdo de Ginebra, y fue parte en los eventos que ocurrieron hasta el 17 de febrero de 1966, fecha de la firma y entrada en vigencia del Acuerdo y tiempo límite establecido por la Corte para ejercer su competencia (párrafo 42, p. 8).

50. Los hechos positivos, constitutivos del fundamento de esta segunda denuncia, relativa a la legitimación del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en la controversia sobre el Laudo de 1899, son igualmente incontrovertibles: el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte debió ser parte de esta controversia y, por tanto, también de la relación procesal iniciada a su respecto, porque fue parte del Laudo, parte de la relación arbitral que antecedió al Laudo, parte del compromiso arbitral que fue la base de dicha relación, parte de la controversia con Venezuela, sobre la frontera con la Colonia de Guyana Británica, que dio lugar a dicho compromiso, y parte de la relación jurídica sustancial, de naturaleza territorial, constituida entre Venezuela y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, a propósito de la frontera en cuestión.

51. Se trata de una segunda denuncia, claramente distinta de la primera, constitutiva de una segunda excepción preliminar, claramente distinta de la primera, que, de hallarse fundada, exigiría la incorporación del Reino Unido como parte en la controversia y en el proceso en curso, por estar provisto de legitimación sustancial, pero que, en caso contrario, es decir, en ausencia del Reino Unido, haría inútil la continuación de la controversia y del proceso sin una de las partes, haría inútil el tratamiento del mérito de dicha controversia e inútil el ejercicio,

por parte de la Corte, de su competencia para conocer y decidir sobre dicho mérito.

52. Ahora bien, no se observa relación de semejanza y menos aún de identidad entre una y otra excepción:

En el orden procesal, los hechos constitutivos de la primera excepción son contrarios a los de la segunda; por la primera excepción, Venezuela pretende que Guyana sea retirada de la controversia y del proceso, mientras que, por la segunda, pretende que el Reino Unido sea incorporado a la controversia y al proceso; de ser acogida la primera excepción, Venezuela no pretende que Guyana sea reemplazada por el Reino Unido y, de ser acogida la segunda, Venezuela no pretende que el Reino Unido sea reemplazado por Guyana; de ser estimada la primera, Venezuela pretende que el proceso se extinga, mientras que, de ser estimada la segunda, y de incorporarse el Reino Unido al proceso, Venezuela pretende que éste continúe; de ser estimada la primera, Venezuela pretende que se juzgue inútil y no se trate el mérito de la controversia y que, en consecuencia, la Corte se abstenga de ejercer su competencia para conocer y decidir sobre dicho mérito, mientras que, de ser estimada la segunda, y de incorporarse el Reino Unido al proceso en curso, Venezuela pretende que se trate el mérito de la controversia y que, en consecuencia, la Corte ejerza su competencia para conocer y decidir sobre dicho mérito, a la luz del Acuerdo; desde luego, si el Reino Unido no se hace parte de la controversia y del proceso, éste no debe continuar y, en ausencia de una de las partes de la controversia, la Corte no debe pronunciarse sobre su fundamento.

Cabe hacer notar que la incorporación de un tercer Estado a un proceso en curso, como sería el caso del Reino Unido, se halla expresamente autorizada, tanto en el Estatuto de la Corte (artículo 62.1) como en su Reglamento (artículos 81 y 82).

53. Y en el orden sustancial, no hay duda de que, en la controversia sobre la validez o nulidad del Laudo del 3 de octubre de 1899, solamente podría enjuiciarse el comportamiento lícito o ilícito de quienes fueron parte en el arbitraje de 1899 y, por tanto, solamente podría juzgarse el del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, no el de la República Cooperativa de Guyana, cuya existencia como Estado se inició el 26 de mayo de 1966, de modo que la responsabilidad del

Reino Unido podría ser establecida únicamente si se acoge la segunda excepción, no si se acoge la primera.

54. En las circunstancias expuestas, lo procesalmente correcto era que la Corte, luego de oír la posición de Guyana en torno a las dos excepciones preliminares opuestas por Venezuela, las admitiera a examen o no y, en caso de admitirlas, examinara los hechos constitutivos del fundamento de cada una de ellas, estableciera su veracidad o falsedad y, sobre esta base, acogiera o rechazara la primera excepción, ordenando o no la exclusión de Guyana y, de ser el caso, acogiera o rechazara la segunda excepción, ordenando o no la incorporación del Reino Unido como parte de la controversia y del proceso.

55. No fue así.

Guyana, en sus observaciones escritas a las excepciones preliminares de Venezuela (página 1, párrafo 3), formuló las siguientes tres afirmaciones:

- a) Venezuela usa el plural en la presentación de sus excepciones preliminares ante la Corte.
- b) Sin embargo, Guyana entiende que Venezuela está presentando realmente una única excepción preliminar.
- c) Esta única excepción preliminar está basada en el argumento de que el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte es una tercera parte indispensable en este procedimiento sin la cual la Corte no debe ejercer su jurisdicción.

56. Es decir, Guyana, imposibilitada de negar la excepción primera que consta en el Capítulo V del escrito de excepciones presentado por Venezuela (páginas 6 y 7, párrafos 36, 37, 38, 39, 40 y 41), es decir, la de inadmisibilidad que denuncia su falta de legitimación para ser parte de la controversia sobre el Laudo y del proceso en curso, e imposibilitada de desvirtuar la veracidad de los hechos que le sirven de fundamento, optó por silenciar toda referencia a esta primera excepción preliminar, para “entender” (subrayado añadido) que Venezuela había opuesto una sola excepción y no dos, y para sostener, sin explicación ni fundamentación alguna, que Venezuela había opuesto únicamente la excepción preliminar segunda, la relativa al Reino Unido que consta en el Capítulo VI del escrito de excepciones (páginas 8 a 10, párrafos 42, 43, 44, 45, 50, 51, 52, 53 y 54).

57. Esta maniobra evasiva solo podía ser ejecutada por quien tuviese conocimiento anticipado de que la Corte también estaba dispuesta a “entender” que Venezuela había opuesto una sola excepción preliminar y no dos, y a abdicar de su obligación ineludible de pronunciarse sobre el mérito de la citada excepción preliminar de inadmisibilidad, una vez admitida.

58. El hecho cierto es que, como nos permitimos anticipar, la Corte intercaló, entre los párrafos 26 y 28 de la parte narrativa de su decisión, sin explicación ni justificación alguna, un párrafo 27, a través del cual se pronunció sobre el tratamiento de las excepciones preliminares opuestas por Venezuela, formulando en lo esencial las siguientes tres afirmaciones

- a) Venezuela, en sus presentaciones finales, incluye referencias a sus “excepciones preliminares” en plural.
- b) Sin embargo, la Corte entiende que Venezuela está presentando en sustancia una única excepción preliminar.
- c) Esta única excepción preliminar está basada en el argumento de que el Reino Unido es una tercera parte indispensable sin cuyo consentimiento la Corte no puede decidir sobre la controversia.

59. Basta comparar las afirmaciones de Guyana con las de la Corte para constatar que ésta, al pronunciarse sobre el tratamiento de las excepciones opuestas por Venezuela y, en particular, sobre el tratamiento de la excepción de inadmisibilidad por falta de legitimación de Guyana, se limitó a parafrasear la afirmación manifiestamente falsa de Guyana, según la cual Venezuela había presentado realmente una única excepción preliminar. La paráfrasis, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, consiste en la “3. Frase que, imitando en su estructura otra conocida, se formula con palabras diferentes”.¹

60. Como puede observarse, se trata de una decisión de la Corte Internacional de Justicia desprovista de todo fundamento de hecho y de derecho, a través de la cual abdica de su obligación de pronunciarse sobre el mérito de la citada excepción preliminar de inadmisibilidad por falta de legitimación opuesta por la parte demandada y lesiona irreversiblemente el derecho de Venezuela a la defensa en juicio.

¹ dle.rae.es/paráfrasis?m=form

61. La Corte, luego de silenciar en el párrafo 27 de su decisión la primera excepción preliminar opuesta por Venezuela, la relativa a la falta de legitimación de Guyana, y de declarar falsamente que aquélla había presentado en sustancia una única excepción preliminar, la segunda, relativa a la legitimación del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en la controversia sobre el Laudo de 1899, procede a admitir sólo ésta última en el párrafo 74, y a examinarla a partir del párrafo 75.

62. Según la Corte, Venezuela invoca el principio establecido en la decisión del caso *Monetary Gold* para mantener que el interés jurídico del Reino Unido sería el objeto de la decisión en esta controversia. Además, la Corte destaca que las dos partes de este proceso, así como el Reino Unido, son partes del Acuerdo de Ginebra sobre el cual basa su jurisdicción [competencia], y juzga apropiado considerar las implicaciones legales de que el Reino Unido sea parte del Acuerdo de Ginebra, razón por la cual estima necesario hacer una interpretación de las disposiciones relevantes del Acuerdo (párrafo 86).

63. El fragmento del párrafo que antecede, según el cual la Corte Internacional de Justicia basa su competencia en el Acuerdo de Ginebra, obliga a las siguientes consideraciones:

Es cierto que Venezuela invoca el principio establecido en la decisión de la Corte en el caso *Monetary Gold*, según el cual ésta no puede decidir una controversia entre Estados sin el consentimiento de esos Estados a su jurisdicción.

Venezuela da cuenta, en su escrito de excepciones preliminares, de que, en el caso citado, Italia, la parte demandante, planteó la duda sobre su legitimación para presentar una demanda contra Albania, por cuanto ésta no había consentido en la jurisdicción de la Corte ni había comparecido ante ella, planteamiento que condujo a que la Corte declarara que los intereses de Albania no sólo se verían afectados por una decisión, sino que constituirían el objeto mismo de la decisión, razón por la cual no podía considerarse que el Estatuto autorizaba la continuación del procedimiento en ausencia de Albania.

64. Según la Corte, Venezuela plantea que el Reino Unido es una tercera parte indispensable en el proceso, y que la Corte no puede decidir la cuestión de la validez del Laudo de 1899 en ausencia del Reino Unido; que una decisión de la Corte sobre el mérito en este caso

implicaría necesariamente, como requisito previo, una evaluación de la legalidad de cierta “conducta fraudulenta” supuestamente imputable al Reino Unido respecto al Laudo de 1899; que una demanda es inadmisibles si los intereses jurídicos de un tercer Estado constituyen el objeto de la decisión solicitada, y que ese Estado no ha consentido en el juicio de la Corte; que los compromisos y responsabilidades del Reino Unido constituirían el objeto de la decisión a ser dictada en este caso, en razón de que la invalidez del Laudo de 1899 surge de la supuesta conducta fraudulenta del Reino Unido respecto al arbitraje que derivó en el Laudo; y que el Reino Unido no transfirió a Guyana sus compromisos y responsabilidades respecto al Laudo de 1899.

65. La Corte da cuenta de que Guyana le pide que rechace la excepción preliminar de Venezuela, según la cual el Reino Unido es una tercera parte indispensable en el proceso, en ausencia del cual no podría decidir sobre la cuestión de la validez del Laudo de 1899, porque el Reino Unido no tendría intereses jurídicos que pudieran ser afectados por la determinación de la Corte sobre la validez del Laudo en cuestión, mucho menos intereses que constituyan el objeto mismo de la decisión. Según la Corte, Guyana alega que el Reino Unido no tiene ningún interés jurídico actual ni reclamación que hacer sobre la cuestión del territorio por haber renunciado a toda reclamación territorial en relación con esta controversia cuando le otorgó la independencia a Guyana en 1966; que, puesto que la controversia concierne a reclamaciones de territorio en disputa entre Guyana y Venezuela, el Reino Unido no tiene intereses jurídicos que pudieran constituir el objeto mismo de esta controversia, razón por la cual no hay base para que la Corte decline el ejercicio de su jurisdicción en ausencia del Reino Unido; que, en lo que concierne a determinar la validez del Laudo de 1899, lo que habría de ser evaluado por la Corte no sería la legalidad de la conducta del Reino Unido, sino la del tribunal arbitral; que el Reino Unido consintió en el ejercicio de la jurisdicción por parte de la Corte en este caso al negociar y hacerse parte del Acuerdo de Ginebra; que el Reino Unido consintió en que la Corte resolviera esta controversia entre Guyana y Venezuela por virtud del artículo IV.1 del Acuerdo que otorgó a Guyana y Venezuela el derecho exclusivo de remitir la controversia a la Corte sin ninguna participación del Reino Unido; y que la existencia del consentimiento por parte del

Reino Unido hace inaplicable la excepción de Venezuela basada en la decisión de la Corte en el caso relativo a Monetary Gold Removed from Rome in 1943 y en la jurisprudencia posterior.

66. Pero es el caso que el Acuerdo de Ginebra no es la fuente normativa vinculante y, por tanto, no es la base de atribución de competencia a la Corte Internacional de Justicia para conocer y decidir sobre el Laudo de 1899 y la cuestión de su validez. En efecto, la fuente normativa vinculante única del Laudo arbitral del 3 de octubre de 1899 es el Tratado de Arbitraje del 2 de febrero de 1897, instrumento internacional que contiene el compromiso arbitral entre Gran Bretaña y los Estados Unidos de Venezuela sobre el arreglo de la frontera entre la Colonia de Guayana Británica y los Estados Unidos de Venezuela, así como las reglas concernientes al arbitraje, al tribunal arbitral, al procedimiento arbitral y al Laudo arbitral. Y ocurre que el citado Tratado de Arbitraje no atribuye competencia arbitral o jurisdiccional alguna, ni a otro tribunal arbitral ni a la Corte Internacional de Justicia, para revisar el Laudo de 1899, ni para decidir sobre su validez o nulidad.

67. En conclusión, puesto que el Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966 no es la fuente normativa vinculante del Laudo del 3 de octubre de 1899, y el Tratado de Arbitraje del 2 de febrero de 1897, que sí lo es, no atribuye competencia alguna a la Corte para conocer y decidir sobre dicho Laudo, ésta ha venido ejerciendo la jurisdicción internacional, en el caso Guyana vs Venezuela, desprovista de todo fundamento de hecho y de derecho, y ha venido adoptando decisiones judiciales desprovista de toda competencia válidamente atribuida.

68. Por otra parte, en el supuesto de que, sobre la base del Acuerdo de Ginebra, Venezuela y el Reino Unido hubiesen consentido en la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, el Acuerdo sólo podría servir de base normativa de atribución de competencia a la Corte para resolver, no la contención (posición) venezolana sobre el Laudo, sino la controversia expresamente prevista en el encabezamiento de dicho Acuerdo, es decir, “... PARA RESOLVER LA CONTROVERSIA ENTRE VENEZUELA Y EL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE SOBRE LA FRONTERA ENTRE VENEZUELA Y GUAYANA BRITÁNICA”.

69. En consecuencia, si la base de competencia de la Corte Internacional de Justicia es el Acuerdo de Ginebra, y si, según la interpretación que hizo la Corte en su decisión del 18 de diciembre de 2020, Venezuela consintió en su competencia por haber suscrito el Acuerdo en referencia, el consentimiento de Venezuela solamente podría alcanzar para que la Corte ejerciese su competencia sobre la controversia entre Venezuela y el Reino Unido en torno a la frontera terrestre entre Venezuela y la colonia de Guyana Británica, por cuanto el Acuerdo fue aprobado por esos Estados para resolver esa controversia y ninguna otra, sobre ese objeto y sobre ningún otro, y para hacerlo mediante la solución específica consagrada expresamente en su artículo I, de modo que resulta inadmisibles extender dicho consentimiento a otras controversias, así como a controversias de objeto distinto, no reguladas expresamente como tales en el Acuerdo. Por esta otra razón, la Corte se halla desprovista de jurisdicción y competencia respecto a Venezuela para conocer de la controversia introducida por Guyana, a través de su demanda del 29 de marzo de 2018, sobre la validez o nulidad del Laudo de 1899.

70. La Corte decide, para interpretar el Acuerdo de Ginebra, aplicar las reglas de la interpretación de tratados previstas en los artículos 31 a 33 de la Convención de Viena porque “reflejan” reglas del denominado derecho internacional consuetudinario, a pesar de que, como lo aclara la misma Corte, esa Convención no está vigente entre las partes y no es aplicable a instrumentos concluidos antes de su entrada en vigencia, como es el caso del Acuerdo en referencia. De acuerdo con la regla de interpretación inserta en el artículo 31, párrafo 1, de la Convención de Viena, un tratado debe ser interpretado de buena fe, de conformidad con el significado ordinario a ser atribuido a sus términos, en su contexto y a la luz de su objeto y propósito (párrafo 87).

71. A continuación daremos cuenta de la “interpretación” que hace la Corte Internacional de Justicia del Acuerdo de Ginebra, pero es de advertir desde ya que, por su intermedio, la Corte no procura la consecución del fin propio de toda interpretación normativa, sino la confirmación de la tesis de fondo planteada por la parte demandante, Guyana, y acogida por la Corte por anticipado, una tesis dirigida específicamente a excluir al Reino Unido de la “controversia” sobre la validez o nulidad del Laudo arbitral, del cual fue parte principal, así como del proceso

judicial en curso, razón por la cual las observaciones de la Corte, como se verá, giran únicamente en torno a los dos o tres enunciados del Acuerdo que supuestamente la confirman, no sobre aquellos que la niegan.

72. Las observaciones que exponemos a continuación (párrafos 71 a 78) sirven de fundamento a la decisión de la Corte; a esta exposición seguirá el juicio que nos merece en lo principal cada una de ellas (párrafos 79 a 113).

73. La Corte observa que el “énfasis” (sic) puesto por las partes en la independencia de Guyana es una parte importante del contexto para los propósitos de interpretar el artículo IV del Acuerdo; que el preámbulo aclara que el Reino Unido participó en la elaboración del Acuerdo en consulta con el gobierno de Guayana Británica; que el preámbulo también indica que, en la elaboración del Acuerdo, las partes tomaron en cuenta la “próxima independencia de Guayana Británica”; que las referencias a Guyana en los párrafos 1 y 2 del artículo IV presuponen el logro de la independencia de Guayana Británica; que esta independencia fue lograda el 26 de mayo de 1966, unos tres meses después de la conclusión del Acuerdo, y que, a partir de esa fecha, Guyana llegó a ser parte del Acuerdo de conformidad con el artículo VIII (párrafo 89).

74. La Corte observa que, mientras el artículo I del Acuerdo describe la controversia como una existente entre el Reino Unido y Venezuela, el artículo II no prevé papel alguno para el Reino Unido en la etapa inicial del proceso de solución de la controversia; que la referencia a Guayana Británica contenida en el artículo II, la cual puede ser distinguida de las referencias al Reino Unido contenidas en otra parte del Tratado y particularmente en el artículo I, apoya la interpretación de que las partes en el Acuerdo de Ginebra pretendían que Venezuela y Guayana Británica tuviesen el único papel en la solución de la controversia a través del mecanismo de la Comisión Mixta (párrafo 91).

75. La Corte observa que no hay referencia alguna al Reino Unido en los párrafos 1 y 2 del artículo IV del Acuerdo de Ginebra; que dichos párrafos establecen las etapas finales del proceso para la solución de la controversia, pero se refieren únicamente al Gobierno de Guyana y al Gobierno de Venezuela, y colocan sobre ellos la responsabilidad de escoger un medio de solución pacífica previsto en el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas o, de fallar el acuerdo sobre tal medio, hacer

las remisiones establecidas en el párrafo 2 del artículo IV (párrafos 92 y 93).

76. La Corte observa que, interpretando los párrafos 1 y 2 del artículo IV en conformidad con el significado ordinario a ser dado a los términos en su contexto, y a la luz del objeto y propósito del Acuerdo, éste especifica papeles particulares para Guyana y Venezuela, y que sus disposiciones, incluyendo el artículo VIII, no prevén un papel para el Reino Unido en la escogencia o en la participación en los medios de solución de la controversia de conformidad con el artículo IV (párrafo 95).

77. La Corte observa que el plan establecido por los artículos II y IV del Acuerdo de Ginebra refleja el entendimiento común de todas las partes de que la controversia que “existió” (sic) entre el Reino Unido y Venezuela el 17 de febrero de 1966 sería resuelto por Guyana y Venezuela a través de uno de los procedimientos de solución de controversias previstos en el Acuerdo (párrafo 96).

78. La Corte interrumpe aquí su “interpretación” del texto del Acuerdo de Ginebra para hacer una referencia al intercambio de posiciones contrapuestas sobre la validez del Laudo, por parte de Venezuela y el Reino Unido, así como al desarrollo de las negociaciones diplomáticas entre ambos Estados, con participación de la colonia de Guyana Británica, que condujeron a la firma del Acuerdo, y para concluir que el Reino Unido, a pesar de tener conocimiento del alcance de la controversia y de las imputaciones de Venezuela por su mala conducta y por recurrir a procedimientos ilegales, aceptó el plan establecido en el artículo IV, según el cual Guyana y Venezuela podían someter la controversia, sin su participación, a uno de los medios de solución establecidos en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. Luego, la Corte vuelve a mencionar el artículo IV para sostener que el significado ordinario de sus términos, así como su lectura en el contexto y a la luz del objeto y propósito del Acuerdo de Ginebra, apoyan esta conclusión (párrafos 97, 98, 99, 100, 101 y 102).

79. La Corte observa que, de conformidad con el artículo 31, párrafo 3, de la Convención de Viena, en la interpretación de un tratado debe ser tomada en cuenta, junto con el contexto, cualquier práctica posterior de las partes en su aplicación que establezca un acuerdo entre

ellas sobre dicha interpretación; que el Reino Unido no procuró participar en el procedimiento de la Comisión Mixta prevista en el artículo I del Acuerdo, y que ni Venezuela ni Guyana pidieron su participación; que había un entendimiento común entre las partes según el cual el artículo II no había previsto un papel para el Reino Unido en el proceso de solución de la controversia; que Venezuela se comprometió exclusivamente con el Gobierno de Guyana en la implementación del artículo IV del Acuerdo de Ginebra; que el Reino Unido no procuró participar en el procedimiento establecido en el artículo IV para resolver la controversia, ni las partes solicitaron su participación; que el compromiso exclusivo de Venezuela con el Gobierno de Guyana durante el proceso de los buenos oficios indica que había acuerdo entre las partes de que el Reino Unido no tuviese un papel en el proceso de solución de la controversia, y que la práctica de las partes demuestra adicionalmente su acuerdo de que la controversia podía ser resuelta sin la participación del Reino Unido (párrafos 103, 104, 105 y 106).

80. La Corte concluye en que, por ser parte en el Acuerdo de Ginebra, el Reino Unido aceptó que la controversia entre Guyana y Venezuela pudiese ser resuelta por uno de los medios establecidos en el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas; que el Reino Unido aceptó no tener papel alguno en este procedimiento; que, en las circunstancias anotadas, el principio de Monetary Gold no es aplicable; que la excepción preliminar de Venezuela debe ser rechazada, y que, si la Corte estuviese llamada a pronunciarse en su decisión de mérito sobre cierta conducta imputable al Reino Unido, esta circunstancia no le impediría ejercer su competencia basada en la aplicación del Acuerdo de Ginebra (párrafo 107).

81. La Corte apoya sus observaciones en las reglas de interpretación de la Convención de Viena sobre el Derecho de los tratados porque, a su juicio, son un “reflejo” de reglas del derecho internacional consuetudinario.

82. Pero es el caso que la Convención de Viena no dispone que las reglas del derecho internacional consuetudinario, que la Corte no identifica, sean aplicables cuando las reglas de la Convención sean su “reflejo” y, desde luego, tampoco cuando la Convención no esté vigente entre las partes o respecto a instrumentos concluidos antes de su

entrada en vigencia. Lo que establece la Convención es que las normas de derecho internacional consuetudinario continuarán rigiendo para “las cuestiones no reguladas” en ella (prólogo, último párrafo), lo que no es el caso puesto que, según consta en sus artículos 31 y siguientes, la Convención contiene reglas de interpretación de tratados.

83. La Convención también establece que, sin perjuicio de la aplicación de cualesquiera de sus normas a las que los tratados estén sometidos en virtud del derecho internacional, ella solamente se aplicará a los tratados que sean celebrados por Estados después de la entrada en vigor de la Convención con respecto a tales Estados (artículo 4), lo que tampoco es el caso pues el Acuerdo de Ginebra fue celebrado y entró en vigencia (17 de febrero de 1966) antes de la entrada en vigencia de la Convención (23 de mayo de 1980).

84. Según la Corte, las partes pusieron “énfasis” en la independencia de Guyana, lo que a su juicio convierte este dato en una parte importante del contexto para los propósitos de interpretar el artículo IV del Acuerdo de Ginebra.

85. Pero el Reino Unido, que es parte principal del Acuerdo de Ginebra y lo fue del Laudo de 1899, fue privado expresamente por la Corte de su derecho y de su obligación de estar en la controversia sobre el Laudo y en el proceso judicial en curso, razón por la cual no pudo poner “énfasis” en la independencia de Guyana, de modo que el argumento de la Corte no le es aplicable.

86. Por su parte, consta que Venezuela no puso ningún “énfasis” en la independencia de Guyana en su escrito de “Excepciones preliminares a la admisibilidad de la demanda”, de 7 de junio de 2022. Guyana tampoco puso “énfasis” en el hecho de su independencia en la demanda que presentó el 29 de marzo de 2018. Guyana sólo se refirió a su independencia en sus “Observaciones escritas ... sobre las excepciones preliminares de Venezuela”, específicamente en el párrafo 32 de los 37 que contiene su escrito, más unas menciones aisladas en los párrafos 20, 31, 35 y 37, pero no hizo dicha referencia como parte del contexto interpretativo del artículo IV del Acuerdo de Ginebra, como pretende la Corte, sino para responder al argumento de Venezuela sobre la ley de sucesión de Estados. Y la referencia específica que sí hizo Venezuela en

la audiencia pública a la cuestión de la independencia de Guyana fue únicamente en respuesta a la hecha por Guyana en la misma audiencia.

87. Por tanto, el supuesto “énfasis” puesto por las partes sobre el dato de la independencia del Estado demandante, y como parte del contexto interpretativo del artículo IV del Acuerdo de Ginebra, carece de sustentación en lo que concierne a Venezuela y al Reino Unido. El hecho cierto es que, a pesar de que la controversia trata de la validez o nulidad del Laudo de 1899, del cual forma parte principal el Reino Unido y no Guyana, la Corte introduce por propia iniciativa la figura del supuesto “énfasis” en la independencia de Guyana, lo atribuye falsamente a todas las partes, y lo utiliza como si fuera un canon hermenéutico para justificar su decisión de “excluir” al Reino Unido de la controversia sobre el Laudo Arbitral, en beneficio de Guyana, que ni fue parte de dicho Laudo ni fue coautora del artículo IV del Acuerdo.

La independencia de Guyana es un dato relevante para Guyana y para el propio Reino Unido, pero no vincula a Venezuela en lo que concierne al despojo territorial de que fue víctima, pues éste no ha variado de entidad, ni antes del Laudo ni después del Laudo, ni antes del Acuerdo de Ginebra ni después del Acuerdo, ni antes de la independencia de Guyana ni después de su independencia.

El énfasis que sí puso Venezuela, y que la Corte silenció, en la oportunidad de reconocer la independencia de Guyana, fue en dejar constancia expresa, mediante Nota de 26 de mayo de 1966, de que “Venezuela reconoce como territorio del nuevo Estado, el que se sitúa al este de la margen derecha del río Esequibo y reitera ante la comunidad internacional que se reserva expresamente sus derechos de soberanía territorial sobre la zona que se encuentra en la margen izquierda del precitado río; en consecuencia, el territorio de la Guayana Esequiba sobre el cual Venezuela se reserva expresamente sus derechos soberanos, limita al Este con el nuevo Estado de Guyana, a través de la línea del río Esequibo, tomando este desde su nacimiento hasta su desembocadura en el Océano Atlántico”.²

88. Según la Corte, los artículos II y IV del Acuerdo de Ginebra no hacen mención del Reino Unido, circunstancia que, según la Corte

² Ministerio de Relaciones Exteriores (Venezuela): Reclamación de la Guayana Esequiba. Documentos 1962-1981, Caracas, 1981, pp. 107-108.

Internacional de Justicia, significa que el Acuerdo no prevé papel alguno para el Reino en el procedimiento de escogencia del medio de solución, pero tampoco en el proceso judicial de solución de la controversia; que el artículo IV se refiere únicamente a los Gobiernos de Guyana y Venezuela y coloca únicamente sobre ellos la responsabilidad de escoger un medio de solución pacífica de los previstos en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas y, en su defecto, de hacer las remisiones previstas en aquella disposición; y que del significado ordinario dado a los términos de los párrafos 1 y 2 del artículo IV, en su contexto y a la luz del objeto y propósito del Acuerdo, éste atribuye papeles a Guyana y Venezuela en la escogencia de los medios de solución de la controversia, pero no al Reino Unido.

89. Pero es el caso que, en primer lugar, el objeto de que trata el Acuerdo de Ginebra no es la cuestión propuesta por Guyana sobre la validez o nulidad del Laudo de 1899, sino la controversia que, según el encabezamiento del Acuerdo, versa “SOBRE LA FRONTERA ENTRE VENEZUELA Y GUAYANA BRITANICA” (subrayado añadido), de manera que, cuando la Corte hace la supuesta interpretación de los artículos II y IV del Acuerdo, induce a pensar que su contenido se refiere a la cuestión sobre la validez o nulidad del Laudo, al procedimiento de escogencia de un medio de solución pacífica de la cuestión del Laudo, y a los papeles que atribuye a Guyana y Venezuela, y no al Reino Unido, en el proceso judicial de solución pacífica de la cuestión del Laudo.

90. No es así.

El tratado bilateral que aprobaron Venezuela y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte el 17 de febrero de 1966 fue un acuerdo para resolver la controversia existente entre ellos sobre la frontera (terrestre) entre Venezuela y la Colonia de Guayana Británica, de manera que su régimen jurídico trata exclusivamente de la controversia sobre dicha frontera, de la solución para esta controversia, es decir, del “arreglo práctico” de la frontera que consagra el artículo I, y del procedimiento para alcanzar la solución pacífica de la controversia sobre la frontera, y no de ninguna otra cuestión.

91. Por esta razón, cuando el Secretario General de la Organización de Naciones Unidas se dirigió a los Presidentes de Guyana y Venezuela, mediante comunicación del 30 de enero de 2018, para

anunciarles su voluntad de remitir el caso a la Corte Internacional de Justicia, en caso de que no hubiese habido progresos significativos hacia un acuerdo pleno para la solución de la controversia, alude al “marco para la resolución de la controversia fronteriza” (subrayado añadido) que les había transmitido el anterior Secretario General, basado en sus propias conclusiones sobre los que podrían constituir los pasos siguientes más apropiados. La referencia a esta comunicación consta en la decisión de la Corte del 18 de diciembre de 2020 (párrafo 103).

92. Por tanto, la desnaturalización que ha hecho la Corte del objeto de la controversia de que trata el Acuerdo de Ginebra, cual es el de la frontera entre Venezuela y la citada colonia del Reino Unido, introduciendo *ex officio* en su lugar el contenido en la demanda de Guyana del 29 de marzo de 2018, es decir, la validez o nulidad del Laudo de 1899, pone de relieve que el juicio según el cual el Reino Unido, parte principal en el Tratado de Arbitraje, en el tribunal arbitral, en el procedimiento arbitral, en el Laudo Arbitral y en el acuerdo de demarcación, debe ser excluido de la cuestión sobre la validez o nulidad de dicho Laudo y del proceso judicial iniciado a su respecto, como lo ha hecho la Corte, se asienta en el uso e “interpretación” de un Tratado que no regula para su resolución el objeto de la demanda de Guyana, el Laudo de 1899, sino el de la controversia del Acuerdo, la frontera terrestre entre Venezuela y el Reino Unido.

En efecto, Venezuela y el Reino Unido convinieron en establecer en el artículo I del Acuerdo una solución específica para la controversia entre ambos Estados sobre la frontera, no sobre el Laudo; y con el objeto de procurar esa solución para esa controversia de límites, y no para la del Laudo ni para ninguna otra, establecieron además la Comisión Mixta (artículos I, II, III y VI), el procedimiento para la elección de uno de los medios de solución de la controversia sobre la frontera, no de una controversia sobre el Laudo, (artículo IV) y el régimen de tutela de la soberanía sobre los territorios de ambos Estados (artículo V).

Posteriormente, la Ley Aprobatoria del Acuerdo de Ginebra, sancionada por el Congreso Nacional de Venezuela en fecha 15 de abril de 1966, y publicada en la Gaceta Oficial de la República número 28.008, estableció en su Artículo Único la aprobación por el Congreso, en todas y cada una de sus partes, y a los fines legales correspondientes, el

Acuerdo firmado en Ginebra el día 17 de febrero de 1966 para resolver la controversia entre Venezuela y el Reino Unido sobre la frontera con la Guayana Británica.

93. En el marco de la desnaturalización que hace del objeto de la controversia de que trata el Acuerdo de Ginebra, la Corte anuncia que dará cuenta del significado ordinario de los términos de los párrafos 1 y 2 del artículo IV del Acuerdo, en su contexto y a la luz de su objeto y propósito, pero no consta en su decisión que haya hecho interpretación alguna de tales términos, ni literal ni sistemática ni teleológica, limitándose a declarar sin más que de dichos términos se deduce que Guyana y Venezuela, y no el Reino Unido, tienen papeles que cumplir en la escogencia de los medios de solución pacífica de la controversia.

94. La Corte anuncia asimismo que hará la interpretación del artículo IV en el contexto del Acuerdo, pero la lectura del Capítulo III de su decisión (párrafos 75 a 107), relativo al examen de la excepción preliminar de Venezuela, revela que, de los ocho (8) artículos que contiene el Acuerdo, la Corte solamente transcribe o hace algún comentario de los artículos I, II y IV, silenciando toda mención del artículo V (1) que consagra la que denominamos “Cláusula Interpretativa del Acuerdo”, según la cual, por ejemplo, nada de lo contenido en el Acuerdo puede ser interpretado como una disminución de los derechos del Reino Unido que hubiese hecho valer previamente, así como del artículo V (2) que consagra la que denominamos “Cláusula de Prohibición de Innovar”, según la cual, por ejemplo, ningún acto o actividad que se lleve a cabo mientras se halle en vigencia el Acuerdo de Ginebra constituirá fundamento para negar una reclamación de soberanía territorial de Venezuela o del Reino Unido, razones por las cuales no habría lugar a interpretar disposición alguna del Acuerdo de modo que signifique la exclusión del Reino Unido de cualquier controversia que, como la introducida por Guyana sobre el Laudo de 1899, pueda debilitar sus derechos o negar sus reclamaciones.

La Corte también silencia que, fuera de la referencia a la posición sobre el Laudo de 1899 que sostiene una de las partes del Acuerdo, éste no contiene regulación alguna sobre el Laudo ni, por la razón cronológica, sobre la controversia introducida por Guyana a su respecto el 29 de marzo de 2018, es decir cincuenta y dos (52) años después.

95. Así pues, el hecho de que el artículo IV del Acuerdo no le haya atribuido al Reino Unido papel alguno en la escogencia de los medios de solución pacífica de la controversia sobre la frontera, más exactamente, el hecho de que el Reino Unido haya redactado, aprobado y suscrito, junto con Venezuela, una disposición en la cual no se haya atribuido papel alguno en aquella escogencia, no puede significar, como pretende la Corte, que también se haya excluido de la controversia misma, cuya solución redactó, aprobó y suscribió, y del proceso judicial escogido como medio de solución de tal controversia. El Acuerdo de Ginebra tampoco podría servir de base para la exclusión del Reino Unido si se considera que Venezuela, la otra parte del Acuerdo aún vigente, y corredactora y firmante del artículo IV citado, sostiene, a diferencia de la Corte, que el Reino Unido debe formar parte de la controversia y, por tanto, del proceso en curso, razón por la cual estima que éste no debe continuar en su ausencia.

No sobra, además, aclarar que el propósito de Venezuela y el Reino Unido fue establecer en el Acuerdo de Ginebra un régimen jurídico destinado a resolver la controversia sobre la frontera terrestre entre Venezuela y la colonia de Guyana Británica, razón por la cual disciplinaron, entre otros puntos, un procedimiento para la escogencia de un medio de solución pacífica de dicha controversia, pero no hay base alguna para interpretar que también fue parte de su propósito establecer quién o quiénes podían ser parte o no de la controversia citada o de cualquiera otra, y menos aún quién o quiénes podían ser parte o no de un proceso judicial futuro que, sobre una controversia distinta, instaurara un Estado que, como la República Cooperativa de Guyana, no existía para la fecha de la firma del Acuerdo ni intervino en su aprobación.

96. Y si bien la Corte anuncia que además hará la interpretación del artículo IV a la luz del objeto y propósito del Acuerdo de Ginebra, la lectura del Capítulo III de su decisión (párrafos 75 a 107) revela que ella únicamente recuerda que, a su juicio, el objeto y propósito del Acuerdo es asegurar una resolución definitiva de la controversia entre las partes (párrafo 94), silenciando una y otra vez que la controversia a que se refiere el Acuerdo, y que exige una resolución definitiva, es la que tiene por objeto la frontera terrestre entre Venezuela y la Colonia de Guayana Británica, no la introducida por Guyana sobre la validez o

nulidad del Laudo de 1899, y omitiendo una y otra vez toda referencia a la solución expresamente prevista en el artículo I del Acuerdo, cual es la de “buscar soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia entre Venezuela y el Reino Unido”.

97. Tal vez la renuencia deliberada de la Corte a referirse al tipo específico de solución que consagra el artículo I del Acuerdo guarde relación con el hecho de que una controversia cuyo objeto sea la determinación del límite fronterizo entre dos Estados es susceptible de un “arreglo práctico” (subrayado añadido) que resulte aceptable para ambas partes, pero no lo es para una cuestión cuyo objeto sea el establecimiento irrevocable de la validez o nulidad de un Laudo Arbitral.

98. La ocasión es propicia para destacar además la diferencia de tratamiento que merece el hecho de la independencia de Guyana: si la controversia tiene por objeto la frontera entre Venezuela y la antigua colonia de Guyana Británica, la actual República Cooperativa de Guyana se halla legitimada para ser parte de la vía pacífica que se acuerde para resolverla y la solución sería evidentemente la prevista en el artículo I del Acuerdo de Ginebra y ninguna otra; en cambio, si la controversia tiene por objeto la validez o nulidad del Laudo Arbitral de 1899, quienes se hallan legitimados para ser parte de la vía pacífica que se acuerde para resolverla son los que fueron parte del arbitraje y la solución sería la prevista en el Tratado de Arbitraje; sin embargo, una controversia sobre la validez o nulidad del Laudo Arbitral carece de todo fundamento porque la celebración del Acuerdo de Ginebra, cuyo objeto es la controversia sobre la frontera terrestre entre Venezuela y la antigua Guyana Británica, actual República Cooperativa de Guyana, suspendió *ipso iure* la obligatoriedad del Laudo Arbitral y su aplicación.

99. Según la Corte, los artículos II y IV del Acuerdo de Ginebra reflejan que hay el entendimiento común entre las partes de que la controversia que existió (sic) entre el Reino Unido y Venezuela debe ser resuelto por Guyana y Venezuela.

100. Como puede observarse, la Corte acude de nuevo a la figura del “reflejo” como fundamento jurídico para declarar, sin hacer interpretación alguna de las disposiciones que invoca, que las partes del Acuerdo de Ginebra, es decir, Venezuela, el Reino Unido y la antigua Guyana Británica, convinieron en que la controversia de que trata dicho

Acuerdo dejó de existir, y que esa controversia, “que existió”, debía ser resuelta por Venezuela y Guyana.

101. Ahora bien, el artículo II regula en lo esencial la integración de la Comisión Mixta, a cargo de los Gobiernos de Venezuela y de la Colonia de Guayana Británica, pero su estructura normativa no contiene elemento alguno que refleje que la controversia entre el Reino Unido y Venezuela haya dejado de existir o que las partes hayan convenido en que dicha controversia sea resuelta por Guyana y Venezuela.

102. Por su parte, el artículo IV regula en lo esencial las facultades de los Gobiernos de Venezuela y Guyana de escoger uno de los medios de solución pacífica de los previstos en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas y, en su defecto, de referir la escogencia del medio de solución a un órgano internacional y finalmente al Secretario General de las Naciones Unidas, pero su estructura tampoco refleja que la controversia entre el Reino Unido y Venezuela haya dejado de existir o que del hecho de que Guyana y Venezuela puedan seleccionar un medio de solución pacífica de la controversia o referir la selección del medio a un organismo internacional derive que el Reino Unido deba ser excluido de la controversia sobre el Laudo Arbitral y del instrumento procesal elegido para resolverla.

103. Por tanto, no es cierto que las disposiciones citadas reproduzcan el entendimiento común de todas las partes a que se refiere la Corte.

104. La Corte también argumenta que la exclusión del Reino Unido del proceso de solución de la controversia se desprende: de que el Reino no procuró participar en el proceso judicial en curso, cuando es lo cierto que la misma Corte le imposibilitó por orden expresa su participación en dicho proceso; de que el Reino Unido no procuró participar en el procedimiento de la Comisión Mixta prevista en el artículo I del Acuerdo, cuando es lo cierto que, según consta en el artículo II, lo hizo a través de su colonia denominada Guayana Británica; de que ni Venezuela ni Guyana pidieron su participación, como si la legitimación del Reino Unido en tanto que parte de la controversia y del proceso dependiera de la petición de otros Estados; de que había un entendimiento común entre las partes según el cual el artículo II no había previsto un papel para el Reino Unido en el proceso de solución de la controversia, como si no hubiese sido el Reino Unido el coautor del artículo II sino Guyana,

como si el artículo citado no previese la participación de la colonia del Reino Unido en la Comisión Mixta, y como si dicho artículo previese la exclusión del Reino de la controversia y del proceso de solución de la controversia; de que Venezuela se comprometió exclusivamente con el Gobierno de Guyana en la implementación del artículo IV del Acuerdo de Ginebra, como si el ejercicio de las facultades de los gobiernos de Venezuela y Guyana de seleccionar un medio de solución pacífica de la controversia o de referir la selección del medio a un organismo internacional significase la exclusión del Reino Unido de la controversia sobre el Laudo Arbitral y del instrumento procesal escogido para resolverla.

105. Las consideraciones que anteceden permiten sostener que, si bien es cierto que, por acuerdo entre Venezuela y el Reino Unido, Venezuela y Guyana pudieron escoger el medio de solución pacífica de la controversia, la conclusión final de la Corte, según la cual, el Reino Unido, por ser parte del Acuerdo de Ginebra, aceptó no tener papel alguno en el proceso judicial en curso y que la controversia sobre la validez o nulidad del Laudo Arbitral de 1899 pudiese ser resuelta en su ausencia, entre Guyana y Venezuela, carece de todo fundamento en el Acuerdo. Desde luego, en el Acuerdo no consta manifestación alguna de voluntad, expresa o tácita, mediante la cual el Reino Unido haya consentido en no participar en la controversia introducida por Guyana sobre la validez o nulidad del Laudo de 1899 ni en el proceso judicial abierto a este propósito, de modo que la posición de la Corte de declarar cuál es la voluntad del Reino, como si fuese su representante o su intérprete, y sin haberlo oído por haberlo excluido formalmente del proceso en curso, es inadmisibile.

106. No sobra dejar constancia breve del tratamiento desigual que ha otorgado la Corte a las partes en su juicio sobre las excepciones preliminares opuestas por Venezuela, desigualdad procesal cuya primera manifestación fue la negativa de la Corte a examinar y pronunciarse sobre la excepción de inadmisibilidad opuesta por Venezuela a causa de la falta de legitimación de la República Cooperativa de Guyana para estar como parte en la controversia sobre el Laudo de 1899, del cual Guyana no fue parte.

107. Por ejemplo, la Corte refiere en su decisión que Venezuela fundamentó la segunda de sus excepciones preliminares en la jurisprudencia

dencia establecida por la propia Corte en los casos *Monetary Gold Removed from Rome in 1943 (Italy v. France, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and United States of America)*, *East Timor (Portugal v. Australia)* y *Certain Phosphate Lands in Nauru (Nauru v. Australia)*. En efecto, Venezuela invocó, en su escrito de excepciones preliminares, la jurisprudencia citada por la Corte y citó el principio, confirmado una y otra vez, según el cual “Sea cual fuere la naturaleza de la obligación invocada, la Corte no puede decidir sobre la legalidad de la conducta de un Estado si su decisión implica una valoración de la legalidad de la conducta de otro Estado que no sea parte en el caso” (párrafo 22).

108. ¿Cuántas veces examinó la Corte, en la parte motiva de su decisión sobre la citada excepción preliminar, los principios jurisprudenciales invocados por Venezuela? Ni una sola vez. Lo único que hizo la Corte fue mencionar la expresión “*Monetary Gold principle*” en el último párrafo de la parte motiva (párrafo 107), y sólo para declarar sin más que el principio no entraba en juego en este caso.

109. Por su parte, Guyana alegó que el Reino Unido había supuestamente consentido en que la Corte ejerciese su competencia para decidir la controversia entre Guyana y Venezuela y que había aceptado que no tenía papel que jugar en el proceso judicial en curso, fundamentando su alegato en los artículos II y IV del Acuerdo de Ginebra.

110. ¿Cuántas veces reprodujo la Corte, en la parte motiva de su decisión, este alegato de Guyana según el cual el Reino Unido no tenía papel que jugar en el proceso judicial en curso? No menos de seis (6) veces.

111. ¿Y cuántas veces mencionó o citó la Corte, en la parte motiva de su decisión, el artículo IV del Acuerdo de Ginebra invocado expresamente por Guyana como fundamento de su alegato? Trece (13) veces.

112. Así pues, la Corte se abstuvo absolutamente de examinar los antecedentes jurisprudenciales de la excepción preliminar opuesta por Venezuela y, en su lugar, optó por infringir el principio de irretroactividad para hacer valer un instrumento internacional posterior al Acuerdo de Ginebra, la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, a fin de citar sus reglas de interpretación con el objeto de relacionarlas al trece (13) veces mencionado artículo IV del Acuerdo de Ginebra, base

de la tesis de Guyana según la cual el Reino Unido, parte principal del Laudo de 1899, supuestamente consintió en no jugar papel alguno ni en la controversia sobre el Laudo ni en el proceso judicial en curso.

113. Este tratamiento procesal desigual, en perjuicio manifiesto de Venezuela, se inició con la negativa de la Corte Internacional de Justicia a comunicar al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por órgano de la Secretaria de la Corte, la demanda de la República Cooperativa de Guyana contra Venezuela, a pesar de la relación documentada e innegable del Reino Unido con el Laudo Arbitral de 1899, objeto de la controversia introducida por Guyana, y de las disposiciones previstas en los artículos 40.2 y 40.3 del Estatuto de la Corte, según las cuales el Secretario debe comunicar la demanda a todos los interesados (“to all concerned”), así como a cualquier Estado con derecho a comparecer ante la Corte (“any other States”). Cabe agregar que el artículo 26.a del Reglamento de la Corte prescribe que la realización de las notificaciones exigidas por el Estatuto o por el Reglamento constituye una obligación para el Secretario que, en este caso, también fue incumplida.

114. Por otra parte, consta en la decisión que comentamos que la Corte acudió a la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados con el objeto de utilizar sus reglas de interpretación en la convención internacional denominada Acuerdo de Ginebra, y es el caso que el artículo 63.1 del Estatuto de la Corte prescribe que, cuando se discuta la interpretación de una convención de la cual formen parte Estados distintos a los interesados en el caso, el Secretario debe notificar inmediatamente a tales Estados para que presenten sus observaciones. Puesto que es indudable que el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte forma parte del Acuerdo de Ginebra, objeto de interpretación por las partes del juicio, y visto que la Corte excluyó expresamente al Reino Unido como parte interesada, el Secretario debió notificarlo para que presentara sus observaciones sobre, por ejemplo, el artículo IV del Acuerdo, deber de notificación inmediata que también incumplió.

115. Estas infracciones básicamente estatutarias parecían anticipar la decisión de la Corte del 6 de abril de 2023 de ordenar expresamente la exclusión del Reino Unido de la controversia y del proceso en curso, exclusión destinada a causar el mayor perjuicio procesal a Venezuela, porque ésta no podrá atribuir a Guyana la conducta ilícita imputable

al Reino Unido, ni podrá exigir de ella la exhibición de los elementos de prueba en posesión del Reino, al tiempo que éste no tendrá que responder por su conducta arbitral ni estará sometido a carga alegatoria o probatoria alguna y, por no ser parte en juicio, no estará sometido a la sentencia definitiva que la Corte que lo excluyó pronuncie, ni a sus efectos.

Así, en lo que concierne a la expoliación casi total que hiciera del territorio de la Guayana Esequiba, el Reino Unido se hizo absolutamente presente para disponer a su antojo del Tratado de Arbitraje y para dotar, por medio del Laudo de 1899, de apariencia de legalidad arbitral a la expoliación; ahora, por voluntad de la Corte Internacional de Justicia, quedaría absolutamente ausente de la controversia sobre dicho Laudo, exento de toda responsabilidad por la expoliación en que incurriera, y sin obligación alguna frente a la sentencia que dicte la Corte que lo excluyó.

116. La desigualdad de tratamiento ha ido también en beneficio del Estado demandante: por ejemplo, Guyana ha sostenido a lo largo de los años la tesis de que el Laudo de 1899 fue una decisión definitiva y completa de la controversia, pero el Vicepresidente de ese país, en una comunicación de fecha 8 de junio de 2015, pidió al Secretario General de las Naciones Unidas que: “en el contexto de (su) responsabilidad ... y más específicamente, (su) mandato bajo el Acuerdo de Ginebra de 1966, determinar un medio de ... arreglo que, a (su) juicio, traería un fin definitivo y concluyente ... a la controversia” (subrayado añadido); y el Presidente de ese país, en una comunicación de fecha 21 de diciembre de 2016, aseguró al Presidente de Venezuela su compromiso de: “cumplir las más altas expectativas del proceso de ‘Buenos Oficios’ en el próximo periodo de doce meses en conformidad con la decisión del Secretario General, a concluir un arreglo completo de la controversia, y, en caso de ser necesario, a resolverla posteriormente por recurso a la Corte Internacional de Justicia”(subrayado añadido).

Estos dos pronunciamientos oficiales de Guyana, citados en la decisión de la Corte de fecha 18 de diciembre de 2020 (párrafos 55 y 58), desaparecieron en su texto de la decisión de fecha 6 de abril de 2023, a pesar de hallarse vinculados con la petición principal de su demanda del 29 de marzo de 2018, en la cual solicita a la Corte que declare que

el Laudo de 1899 es vinculante para Guyana y Venezuela, efecto vinculante que no puede atribuirse sino a un Laudo definitivo y completo.

117. Otro tanto cabe decir del uso que hace la Corte de la independencia de Guyana como punto de partida para excluir al Reino Unido de la controversia sobre el Laudo de 1899, silenciando la reserva expresa que Venezuela hiciera en la oportunidad de reconocer dicha independencia, y como si la expoliación establecida en el Laudo hubiese variado de entidad por su causa, el Reino Unido hubiese dejado de ser parte del Tratado de Arbitraje y del Laudo, y la controversia sobre la frontera, prevista y regulada para su resolución en el Acuerdo de Ginebra, hubiese dejado de existir.

III. CONSIDERACIONES ADICIONALES

118. Guyana y la Corte han expuesto una serie de consideraciones adicionales, principalmente a propósito de las excepciones preliminares opuestas por Venezuela, que nos parece necesario cuestionar, así sea muy brevemente, en los términos que presentamos a continuación.

119. El Estado que conviene en dejar una referencia en el Acuerdo de Ginebra sobre la posición venezolana en torno al Laudo de 1899, según consta en el artículo I del Acuerdo, no es la República Cooperativa de Guyana, que no existía ni para la fecha del Laudo ni para la fecha del Acuerdo, sino el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, parte principal del Laudo y del Acuerdo. En las circunstancias anotadas, y si se considera que el objeto de la controversia que disciplina el Acuerdo no es la cuestión del Laudo sino la cuestión de la frontera terrestre entre Venezuela y la colonia del Reino Unido, ¿cómo es que la Corte, no sólo se interesa en silenciar la falta de legitimación de Guyana, sino que además da curso a una demanda, presentada por dicho Estado, cuyo objeto no es el que se encuentra regulado en el Acuerdo, sino el Laudo citado, del cual no formó parte?_

Y, puesto que no consta que el Reino Unido haya renunciado a sus obligaciones en el Acuerdo de Ginebra, ni tampoco que haya designado a Guyana como su representante, ¿cómo podría la Corte declarar la nulidad del Laudo de 1899 en ausencia de una de las dos únicas partes principales del arbitraje que dio lugar al Laudo en referencia?

120. Si la sentencia definitiva y firme que dicte la Corte sobre la controversia en torno a la validez o nulidad del Laudo de 1899 no será vinculante para el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, a pesar de ser parte principal del Laudo y del Acuerdo, por cuanto fue excluido expresamente por la propia Corte de dicha controversia y del proceso en curso, y no fue oído en él, ni como parte ni como tercero, cómo es que sí será vinculante para la República Cooperativa de Guyana, que no fue parte del Laudo ni suscribió el Acuerdo de Ginebra, por cuanto no existía ni para el 3 de octubre de 1899 ni para el 17 de febrero de 1966, y sólo vino a ser parte de Acuerdo después de su independencia?

¿Y si la sentencia definitiva y firme que dicte la Corte sobre la validez o nulidad del Laudo no ha de ser vinculante para el Reino Unido, a pesar de ser parte principal de aquél, por qué razón ha de ser vinculante para Venezuela frente a Guyana, que no fue ni parte ni tercero frente al Laudo porque no existía para la fecha de su pronunciamiento?

121. No es cierto que, como sostiene Guyana, el Acuerdo de Ginebra regula únicamente los procedimientos para resolver la controversia sobre el asunto de la validez del Laudo Arbitral entre Guyana y Venezuela. Y no lo es porque: en primer lugar, el Acuerdo fija expresamente su objeto y propósito, cual es, según se desprende de su Encabezamiento y de su artículo I, el de resolver “la controversia entre Venezuela y el Reino Unido” (subrayado añadido), mediante un “arreglo práctico” (subrayado añadido), en forma que “resulte aceptable para ambas partes” (subrayado añadido), expresiones literales que la Corte silencia deliberadamente una y otra vez en su decisión del 6 de abril de 2023, y en segundo lugar, los procedimientos que regula el Acuerdo no lo son para resolver la “controversia” sobre la validez del Laudo Arbitral entre Guyana y Venezuela, no regulada en el Acuerdo, sino la que tiene por objeto, según precisa su Título, la “FRONTERA ENTRE VENEZUELA Y GUYANA BRITANICA”.

122. La República Cooperativa de Guyana determinó que el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte no debía jugar papel alguno en el proceso judicial en curso, se pronunció sobre la existencia o no de sus intereses en la controversia sobre el Laudo de 1899, se pronunció sobre la existencia o no de sus derechos y obligaciones en el Acuerdo

de Ginebra, e interpretó que el Reino Unido había renunciado a sus intereses y reclamaciones después de la independencia de Guyana, manifestando así la supuesta voluntad del Reino Unido ante la Corte y su posición en torno a la controversia, a pesar de hallarse desprovista Guyana de toda facultad de representación legal o judicial del Reino, y de no haber redactado ni suscrito el Acuerdo en referencia.

En suma, el propósito de Guyana ha sido impedir que la Corte tome conocimiento de la expoliación en que incurrió el Imperio que la colonizó y que también quiso colonizar a Venezuela, tarea que no completó pero que comenzó con el despojo casi total del territorio de la Guayana Esequiba y continuó con el bombardeo de las costas venezolanas, junto a otros Estados, mientras se demarcaba la frontera terrestre fijada por el Laudo de 1899.

En respuesta a esta especie de representación ilegítima ejercida por Guyana, la Corte no procedió a ejercer su competencia para notificar y oír al Reino Unido acerca de sus intereses en el Laudo o/y en el Acuerdo, sino para reproducir no menos de seis (6) veces el alegato principal de Guyana, mencionar o citar no menos de trece (13) veces el artículo IV del Acuerdo invocado por ella, y ordenar, sin oírlo, la exclusión del Reino Unido de la controversia sobre la validez del Laudo y del proceso para resolverla, impidiéndole así, deliberadamente, la expresión de su voluntad, el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, incurriendo así la Corte en la infracción del principio del Monetary Gold case, a pesar de haberlo declarado inaplicable en su decisión. Propiamente, la Corte declaró inaplicable el principio para preservar su competencia a pesar de la ausencia de la parte principal del Laudo, de la controversia y del proceso en curso, pero lo aplicó para preservar dicha competencia por la vía de excluir sin oír a la parte principal del Laudo y de la controversia, de modo de continuar el proceso en su ausencia.

123. La consideración que antecede obliga a interrogarnos sobre el sentido de que el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte hubiese discutido y aprobado un acuerdo bilateral para resolver una controversia y hubiese establecido en él la solución específica correspondiente, para renunciar a la vez, en el mismo acuerdo, a ser parte del proceso judicial destinado a resolverla. Si a esta interrogante se agrega que el artículo IV del Acuerdo de Ginebra se refiere únicamente

al procedimiento de escogencia de uno de los medios de solución pacífica de controversias previstos en la Carta de las Naciones Unidas, y de ninguna manera al proceso judicial de solución de la controversia sobre la validez o nulidad del Laudo de 1899, no cabe duda de que la interpretación realizada por Guyana y acogida por la Corte carece de todo sentido.

124. Los intereses del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte no abarcan únicamente sus derechos sino también sus obligaciones. Y es el caso que varias de estas obligaciones se encuentran expresamente previstas en el Acuerdo de Ginebra; que el Reino Unido contrajo tales obligaciones a la vista y a sabiendas de la posterior independencia de la colonia de Guyana Británica; que son estas obligaciones y no las declaraciones unilaterales del Reino Unido, convenidas con Guyana, las que lo vinculan convencionalmente a Venezuela; y que su exclusión del proceso judicial en curso, ordenada por la Corte, impide a Venezuela reclamar del Reino Unido el cumplimiento de dichas obligaciones, específicamente la que concierne al arreglo práctico de la controversia sobre la frontera terrestre en forma que resulte aceptable para ambas partes.

Es del caso señalar asimismo que los acuerdos celebrados entre el Reino Unido y Guyana no vinculan a Venezuela sino en la medida establecida por el Acuerdo de Ginebra; que tampoco la vinculan las exoneraciones de responsabilidad que proclama unilateralmente el Reino Unido y, desde luego, en lo que concierne a la expoliación territorial de que fue víctima, la independencia de Guyana vincula al Reino Unido, autora de la expoliación, pero de ninguna manera a Venezuela.

Por lo demás, el vínculo de Venezuela con Guyana es el fijado por el Acuerdo de Ginebra, a propósito del procedimiento allí establecido para la escogencia de la solución pacífica de la controversia allí prevista sobre la frontera (artículo IV), y también respecto a los actos que hubiesen sido resultado de cualquier convenio que hubiese logrado la Comisión Mixta (artículo V.2), pero no a propósito del Laudo Arbitral de 1899, del cual no formó parte; en consecuencia, si Venezuela y el Reino Unido son las únicas partes legitimadas para debatir sobre una controversia relativa al Laudo, y la Corte excluye al Reino Unido de dicha controversia y del proceso judicial iniciado para resolverla, cómo

es que Venezuela debe obrar en condición de parte en dicho proceso sin poder hacerlo ante su contraparte, y cómo es que debe hacerlo ante quien carece de dicha condición?

125. Según la decisión de la Corte del 18 de diciembre de 2020, Venezuela y Guyana consintieron en su jurisdicción [competencia] por la razón específica de haber conferido al Secretario General la autoridad de escoger el medio apropiado de solución de la controversia, incluida la posibilidad de recurrir a la solución judicial por medio de la Corte Internacional de Justicia (párrafo 115). En su decisión del 6 de abril de 2023, la Corte destacó que el artículo IV del Acuerdo de Ginebra, ya citado en su decisión anterior, había atribuido únicamente a Venezuela y Guyana el procedimiento de escogencia de uno de los medios de solución pacífica previstos en el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas y, en última instancia, la remisión de la escogencia al Secretario General de la Organización de Naciones Unidas y, por tanto, el arreglo judicial de la controversia introducida por Guyana.

En cambio, según la Corte, si bien el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte también había aprobado el Acuerdo en todas sus disposiciones, éste, como lo destacó una y otra vez la misma Corte, no le otorgó papel alguno en el procedimiento citado y, en consecuencia, el Reino Unido no participó en la escogencia del medio de solución pacífica de la controversia, ni en el procedimiento de escogencia, ni en la remisión de la decisión al Secretario General de Naciones Unidas, ni en la escogencia hecha por éste de la solución judicial por medio de la Corte Internacional de Justicia.

Por las razones que anteceden, no hay base para interpretar, como lo hace la Corte, que el Reino Unido haya consentido en su jurisdicción [competencia], a propósito de una demanda que, como la presentada por Guyana sobre la validez o nulidad del Laudo de 1899, no le fue notificada ni versa sobre la controversia prevista y regulada expresamente en el Acuerdo de Ginebra.

Y si no consta en forma alguna que el Reino Unido haya manifestado su voluntad expresa e inequívoca de consentir en su jurisdicción [competencia], con qué autoridad la Corte se ha pronunciado sobre sus derechos e intereses en el Laudo, en el Acuerdo y después de la

independencia de Guyana, y además, sin haberlo oído, lo ha excluido deliberadamente de la controversia sobre el Laudo de 1899 y del proceso judicial en curso?

La interrogante encuentra justificación además en el hecho de que, al introducir Guyana una controversia distinta a la prevista entre Venezuela y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en el Acuerdo de Ginebra y retrotraerla al Laudo de 1889, no hay manera de negar que el Reino Unido fue y sigue siendo parte del Laudo, antes de la independencia de Guyana, que no existía para 1899, y después de tal independencia, y que fue y sigue siendo parte del Acuerdo, antes y después de la independencia de Guyana, que tampoco existía para el 17 de febrero de 1966.

IV. INFRACCIONES PRINCIPALES

126. De las razones de hecho y de derecho que anteceden se desprende que la Corte Internacional de Justicia, en su decisión preliminar del 6 de abril de 2023, incurrió en las siguientes infracciones principales:

126.1. Si se admite que la fuente normativa reguladora y vinculante del Laudo Arbitral del 3 de octubre de 1899 es el Tratado de Arbitraje del 2 de febrero de 1897, mediante el cual Gran Bretaña y los Estados Unidos de Venezuela decidieron someter a arbitramento la cuestión del límite fronterizo entre la Colonia de Guayana Británica y los Estados Unidos de Venezuela, y si se admite que dicho Tratado no contiene norma alguna que atribuya competencia alguna a órgano arbitral o jurisdiccional alguno, de segunda o última instancia, para revisar *sine die* la decisión del Tribunal Arbitral, procede reconocer que la Corte Internacional de Justicia carece de toda competencia para conocer y juzgar sobre la demanda de Guyana del 29 de octubre de 2018, cuyo objeto es la revisión de la validez del citado Laudo Arbitral, razón por la cual la Corte ha venido ejerciendo la potestad jurisdiccional, en el caso Guyana v. Venezuela, desprovisto del título de competencia y, por tanto, del fundamento de derecho correspondiente, incurriendo así en la infracción del Tratado de Arbitraje del 2 de febrero de 1897, el cual no atribuye competencia revisora alguna a la Corte y, por indebida

aplicación, del Acuerdo de Ginebra, el cual no prevé la posibilidad del arreglo judicial para la cuestión de la validez del Laudo de 1899, introducida por Guyana el 29 de marzo de 2018, sino para la controversia sobre la cuestión de la frontera, prevista y regulada expresamente como tal en el Acuerdo.

126.2. En el supuesto de que la Corte Internacional de Justicia tenga atribuida la potestad estatutaria de disponer, mediante el uso argumentativo de una disposición convencional, que un Estado ha manifestado su voluntad libre, clara e inequívoca de consentir en someterse a su jurisdicción y competencia, a pesar de las declaraciones en contrario de dicho Estado; si se admite que, de conformidad con el artículo 38.1 de su Estatuto, la función de la Corte es decidir de conformidad con el derecho internacional las controversias que los Estados sometan a su conocimiento; si se admite que la controversia entre Venezuela y el Reino Unido, expresamente prevista y regulada para su resolución por el Acuerdo de Ginebra, es la que, según su Título, tiene por objeto, puro, simple e incondicionado, la frontera entre Venezuela y la antigua Guayana Británica; si se admite que, de existir el consentimiento en su jurisdicción y competencia que la Corte atribuye a Venezuela, el mismo únicamente podría versar sobre el objeto de la controversia expresamente prevista y regulada para su resolución en el Acuerdo, es decir, sobre la cuestión litigiosa de la frontera entre Venezuela y la antigua Guayana Británica, y si se admite que el objeto de la demanda introducida por la República Cooperativa de Guyana el 29 de marzo de 2018 no es el objeto de la controversia prevista y regulada en el Acuerdo, sino la cuestión de la validez del Laudo Arbitral del 3 de octubre de 1899, procede reconocer que la Corte atribuyó a Venezuela un consentimiento libre, claro e inequívoco que ésta no pudo haber otorgado, por cuanto el mismo sólo podía tener como materia litigiosa la cuestión de la frontera entre ambos Estados, no la cuestión de la validez del Laudo Arbitral, introducida unilateralmente por Guyana, a título de materia litigiosa, cincuenta y dos años después, incurriendo así en la infracción, por indebida aplicación, de la disposición prevista en el artículo 36.1 de su Estatuto, el cual presupone que las partes consienten en la jurisdicción de la Corte cuando le remiten a ella materias de las especialmente

previstas en la Carta de las Naciones Unidas o en los tratados y convenciones vigentes.

126.3. En el supuesto de que la Corte Internacional de Justicia tenga atribuida la potestad estatutaria de disponer, mediante el uso argumentativo de una disposición convencional, que un Estado ha manifestado su voluntad libre, clara e inequívoca de consentir en someterse a su jurisdicción y competencia, a pesar de las declaraciones en contrario de dicho Estado; si se admite que, de conformidad con el artículo 38.1 de su Estatuto, la función de la Corte es decidir de conformidad con el derecho internacional las controversias que los Estados sometan a su conocimiento; si se admite que la controversia entre Venezuela y el Reino Unido, expresamente prevista y regulada por el Acuerdo de Ginebra, es la que, según su Título, tiene por objeto, puro, simple e incondicionado, la cuestión de la frontera entre Venezuela y la antigua Guayana Británica; si se admite que ni Venezuela ni el Reino Unido han presentado a la Corte demanda alguna que haya tenido por objeto puro y simple la controversia prevista y regulada en el Acuerdo sobre dicha frontera, y que la demanda presentada por la República Cooperativa de Guyana, adherente y no coautora ni firmante del Acuerdo de Ginebra, tampoco versa sobre la cuestión litigiosa prevista y regulada para su resolución en el Acuerdo, sino sobre el Laudo de 1899 y sus efectos jurídicos, procede reconocer que la Corte se dotó *proprio motu* de jurisdicción y competencia para conocer y decidir una controversia que, como la que se encuentra expresamente prevista y regulada en el Acuerdo en torno a la cuestión de la frontera entre Venezuela y la antigua Guayana Británica, no le ha sido sometida a su conocimiento por ninguno de dichos Estados, incurriendo así en la infracción, por indebida aplicación, de la disposición prevista en el artículo 36.1 del Estatuto de la Corte, el cual presupone que la jurisdicción de la Corte depende de la remisión que las partes le hagan de materias especialmente previstas en la Carta de las Naciones Unidas o en los tratados y convenciones vigentes.

126.4. En el supuesto negado de que Venezuela, el Reino Unido y/o Guyana hubiesen consentido en la jurisdicción y competencia de la Corte Internacional de Justicia para que tomase conocimiento y decidiese la controversia entre Venezuela y el Reino Unido sobre la cuestión

de la frontera entre Venezuela y la antigua colonia de Guayana Británica; si se admite que, de acuerdo con el artículo 38.1 de su Estatuto, la función de la Corte es decidir de conformidad con el derecho internacional las controversias que los Estados sometan a su conocimiento, y si se admite que, según el Encabezamiento y el artículo I del Acuerdo de Ginebra, la solución de la controversia entre Venezuela y el Reino Unido sobre la citada cuestión de la frontera ha de consistir en su “arreglo práctico”, “en forma que resulte aceptable para ambas partes”, procede reconocer que la Corte carece de competencia funcional para resolver la controversia citada, pues la solución no ha de ser normativa sino práctica, no ha de consistir en la aplicación de las normas del orden jurídico internacional, como lo establece la disposición estatutaria, sino en la aplicación de un “arreglo práctico”, como lo convinieron las partes en el artículo I del Acuerdo, y que, de proveer una solución normativa, la Corte incurriría en la violación, por indebida aplicación, de la disposición prevista en el artículo 38.1 de su Estatuto, según el cual la función de la Corte es decidir de conformidad con el derecho internacional y, por falta de aplicación, del artículo I del Acuerdo de Ginebra, según el cual la tarea consiste en buscar soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia entre Venezuela y el Reino Unido.

126.5. Si se admite que la República Cooperativa de Guyana no fue parte del Laudo Arbitral del 3 de octubre de 1899, ni del procedimiento arbitral que lo precedió, ni del compromiso arbitral contraído por Gran Bretaña y los Estados Unidos de Venezuela en el Tratado de Arbitraje del 2 de febrero de 1897, ni del conflicto en torno a la frontera entre Venezuela y la Colonia de Guayana Británica que precedió al Tratado y al compromiso, ni de la relación jurídica sustancial suscitada entre dichos Estados a causa de la contigüidad de sus territorios, y si se admite que Venezuela denunció, en el Capítulo V de su escrito de excepciones preliminares, la falta de legitimación (*ius standi*) de Guyana para presentar una demanda sobre la validez del Laudo Arbitral en referencia, objetó por este motivo la admisibilidad de dicha demanda y solicitó expresamente a la Corte Internacional de Justicia que, por esta razón, declarase terminado el procedimiento iniciado a su respecto, procede reconocer que la Corte, al declarar sin fundamento alguno

que Venezuela sólo había opuesto una única excepción preliminar, la relativa a la legitimación del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, formuló una declaración falsa por incongruente, por cuanto consta que Venezuela opuso oportunamente la excepción preliminar de inadmisibilidad de la demanda por la falta de legitimación de Guyana y, en consecuencia, omitió dar cumplimiento a su deber jurisdiccional de pronunciarse sobre la citada excepción, con lo cual incurrió en la infracción, por falta de aplicación, de las disposiciones previstas en los artículos 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, según el cual toda persona tiene derecho a ser oída públicamente y con justicia, por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones, y 56.1 del Estatuto de la Corte, según el cual la decisión que dicte debe expresar las razones que la fundamenten.

126.6. Si se admite que en el Acuerdo de Ginebra no consta manifestación alguna de voluntad, expresa o tácita, mediante la cual el Reino Unido haya consentido en no participar en la controversia introducida por Guyana el 29 de marzo de 2018 sobre la validez del Laudo Arbitral del 3 de octubre de 1899; si se admite que tampoco consta en dicho Acuerdo manifestación alguna de voluntad, expresa o tácita, mediante la cual el Reino Unido haya consentido en no intervenir como parte en el proceso judicial en curso, destinado a resolver la controversia mencionada; si se admite que existe una relación jurídica documentada e incontrovertible entre Gran Bretaña y el Laudo Arbitral objeto de la demanda de Guyana, y si se admite que, no obstante la citada relación, la Corte se abstuvo de comunicar la demanda de Guyana al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte como lo disponen los artículos 40.2 y 40.3 del Estatuto de la Corte, procede reconocer que la Corte excluyó expresamente al Reino Unido, tanto de la controversia sobre el Laudo Arbitral como del proceso judicial en curso, privándolo de intervenir en él como parte o como tercero, sin haberlo notificado de la demanda y sin haberlo oído, e incurriendo así en la infracción, por falta de aplicación, de la disposición prevista en el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, según el cual toda persona tiene derecho a ser oída públicamente y con justicia, por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones.

VI. CONCLUSIONES PARCIALES

127. La suma de las consideraciones que anteceden nos permiten alcanzar, entre otras, las conclusiones que se registran a continuación, demostrativas de la contrariedad a derecho de la decisión de la Corte de fecha 6 de abril de 2023, en perjuicio de Venezuela.

127.1. La Corte Internacional de Justicia carece de competencia para conocer y juzgar sobre la demanda de Guyana del 29 de octubre de 2018, cuya petición primera es que la Corte confirme la validez legal y el efecto vinculante del Laudo del 3 de octubre de 1899, por cuanto la fuente normativa reguladora y vinculante de dicho Laudo no es el Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966, suscrito sesenta y siete (67) años después, sino el Tratado de Arbitraje del 2 de febrero de 1897, y éste no atribuye competencia a órgano arbitral o jurisdiccional alguno para revisar la validez del Laudo y proceder o no a su confirmación.

127.2. La Corte Internacional de Justicia carece de competencia para conocer y juzgar sobre la controversia entre Venezuela y el Reino Unido prevista y regulada para su resolución en el Acuerdo de Ginebra, cuyo objeto litigioso es la cuestión de la frontera entre Venezuela y la antigua colonia de Guayana Británica, por cuanto ninguna de las partes de dicha controversia la sometió a la Corte para su conocimiento y decisión, y visto que la demanda del 29 de marzo de 2018, presentada por la República Cooperativa de Guyana, parte adherente no coautora ni firmante del Acuerdo, no versa sobre la citada cuestión litigiosa, sino sobre el Laudo arbitral de 1899, objeto no regulado de ninguna manera para su resolución por el Acuerdo, sino mencionado en él, una única vez, en una única disposición, para referir o dejar constancia de la posición venezolana a su respecto, y no frente a Guyana que no existía para entonces, sino frente al Reino Unido.

127.3. La Corte Internacional de Justicia carece de competencia funcional para resolver la controversia entre Venezuela y el Reino Unido prevista y regulada para su resolución en el Acuerdo, cuyo objeto litigioso es la cuestión de la frontera entre Venezuela y la antigua colonia de Guayana Británica, por cuanto la solución de dicha controversia se encuentra expresamente prevista en el artículo I y en el Encabezamiento del Acuerdo de Ginebra, cual es el “arreglo práctico” entre las

partes, “en forma que resulte aceptable para ellas”, y esta solución no es compatible con la que podría ser provista por la Corte en el ejercicio de la función que le es propia, prevista expresamente en el artículo 38.1 de su Estatuto, cual es la de una decisión normativa, es decir, que guarde conformidad y constituya aplicación de las normas del derecho internacional.

127.4. La Corte Internacional de Justicia se negó deliberadamente a cumplir con su deber jurisdiccional de comunicar la demanda de Guyana, sobre la validez y el efecto vinculante del Laudo arbitral de 1899, al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, tal y como lo exigen las disposiciones estatutarias previstas en los artículos 40.2 y 40.3, según los cuales el Secretario debe comunicar dicha demanda a todos los Estados interesados y notificarla a cualquier otro Estado con derecho a comparecer ante la Corte, a pesar de que ésta se encontraba en conocimiento de que el Reino Unido era y sigue siendo parte principal de dicho Laudo y del Tratado de Arbitraje del 2 de febrero de 1897.

127.5 La Corte Internacional de Justicia, guiada por Guyana, se negó deliberadamente a cumplir con su deber jurisdiccional de decidir el fondo de la más importante excepción preliminar opuesta oportunamente por Venezuela, cual fue la de la inadmisibilidad de la demanda presentada por la República Cooperativa de Guyana en fecha 29 de marzo de 2018, a causa de la manifiesta falta de legitimación sustancial del Estado demandante para ser parte de la controversia sobre el Laudo del 3 de octubre de 1899, por no haber sido parte de dicho Laudo ni tercero a su respecto, ni del procedimiento arbitral que lo precedió, ni del compromiso arbitral contraído por Gran Bretaña y los Estados Unidos de Venezuela, ni del Tratado de Arbitraje del 2 de febrero de 1897, ni del conflicto en torno a la frontera entre Venezuela y la Colonia de Guayana Británica que precedió al Tratado y al compromiso, ni de la relación jurídica sustancial suscitada entre dichos Estados a causa de la contigüidad de sus territorios. Para negarse a decidir, la Corte se limitó a parafrasear las palabras de Guyana, alegando sin fundamento alguno que Venezuela había opuesto una única excepción preliminar, dando a entender que no había opuesto la de inadmisibilidad por falta de legitimación, formulando de este modo una declaración falsa por incongruente que trató de ocultar en la parte narrativa de su decisión del 6 de abril de 2023.

127.6. La Corte Internacional de Justicia, guiada por Guyana, excluyó deliberadamente al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la controversia sobre el Laudo Arbitral de 1899 y del proceso judicial abierto para su conocimiento y decisión, y lo hizo sin haberlo notificado de la demanda de Guyana y sin haberlo oído, y sobre la base de que, según el artículo IV del Acuerdo de Ginebra, el Reino Unido habría consentido en no participar en dicha controversia, presentada por Guyana el 29 de marzo de 2018, ni en el proceso en curso, a pesar de que no consta en el Acuerdo manifestación alguna de voluntad del Reino Unido, expresa o tácita, a la cual sea posible atribuir la supuesta doble falta de consentimiento invocada por la Corte, la misma que, sin oírlo, se permitió suplir su voluntad e interpretar y disponer sobre la existencia e inexistencia de sus intereses. Por virtud de la exclusión ordenada expresamente por la Corte, y dado que, según el artículo 59 de su Estatuto, su decisión no tendrá fuerza vinculante sino entre las partes, la que dicte sobre la cuestión de la validez del Laudo de 1899 no vinculará al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, de modo que, si la Corte declara la nulidad del Laudo, éste podrá conservar su validez para el Reino Unido.

128. A las conclusiones parciales que anteceden, nos permitimos añadir unas consideraciones finales:

128.1. La Corte, guiada por Guyana, ha hecho un manejo incompleto del texto del Acuerdo de Ginebra, invocando aquellas de sus disposiciones que, a su juicio, apoyan la tesis que ha adoptado *a priori*, y silenciando aquellas otras que la niegan. Por ejemplo, menciona o cita el artículo IV del Acuerdo, en la parte motiva de su decisión, no menos de trece (13) veces, para atribuir incorrectamente al Reino Unido la decisión de no participar en el proceso judicial de solución de la controversia sobre el Laudo de 1899, distinto al procedimiento de escogencia de uno de los medios de solución pacífica previstos en el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas a que se refiere el artículo IV, pero no menciona ni una vez el artículo V del Acuerdo, que tutela los derechos del Reino Unido y prohíbe la renuncia o disminución de tales derechos; menciona el artículo I para observar que describe la controversia entre el Reino Unido y Venezuela, pero silencia que el Reino Unido, junto con Venezuela,

estableció en él la Comisión Mixta, fijó la solución específica para la controversia sobre la frontera, cuál es su arreglo práctico, y se la asignó a la Comisión a título de encargo; observa que ninguno de los párrafos del artículo IV menciona al Reino Unido, pero silencia que el Prólogo y los artículos I, V y VIII del Acuerdo sí lo hacen, y que los artículos II y VI se refieren a su colonia de Guayana Británica.

128.2. El manejo parcial que la Corte ha hecho del texto del Acuerdo de Ginebra, del cual también ha formado parte su silencio estricto sobre el “arreglo práctico” de la controversia, ha estado dirigido a dos objetivos principales: en primer lugar, el de utilizar los artículos I y IV como si éstos atribuyesen competencia a la Corte para conocer y decidir sobre la controversia en torno a la validez del Laudo del 3 de octubre de 1899; en segundo lugar, el de utilizar los artículos II y IV como si éstos hubiesen excluido al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la controversia en torno a la validez del Laudo en referencia y del proceso judicial abierto para su conocimiento y decisión.

Nos parece que la argumentación expuesta ha permitido revelar que las decisiones de la Corte, declarativas de su competencia para conocer y decidir sobre la validez del Laudo y de la exclusión del Reino Unido de dicha controversia y del proceso en curso, carecen de fundamento y son contrarias a derecho.

128.3. Y aunque este Informe no ha tenido por objeto el examen procesal de la demanda de Guyana, procede dar cuenta breve de al menos unos pocos elementos demostrativos de que la pretensión declarativa de certeza que contiene carece de las condiciones básicas para ser acogida por la Corte: en efecto, una vez que el Secretario General de la Organización de Naciones Unidas escogió a la Corte Internacional de Justicia como el medio de solución pacífica de la controversia entre Venezuela y el Reino Unido sobre la frontera entre Venezuela y la antigua colonia de Guayana Británica y le remitió dicha controversia para su resolución, por qué la República Cooperativa de Guyana presentó una demanda el 29 de marzo de 2018, pero no para que Corte resolviera la controversia prevista y regulada para su resolución en el Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966, sino para que confirmara la validez del Laudo del 3 de octubre de 1899?

¿Cuál es el fundamento de hecho de la pretensión de validez del Laudo de 1899? ¿Y cuál es su fundamento de derecho? ¿Ejecutó Venezuela algún acto o configuró alguna situación que hubiese hecho surgir para Guyana la necesidad de acudir a la tutela de la Corte para pedir, no la ejecución del Acuerdo de Ginebra, sino la confirmación de validez del Laudo de 1899? ¿Tutela el Tratado de Arbitraje del 2 de febrero de 1897 la pretensión declarativa de un Estado que como Guyana no existía para la fecha de la celebración del Tratado que condujo al Laudo de 1899? ¿Tutela el Laudo Arbitral del 3 de octubre de 1899 la pretensión declarativa de un Estado que como Guyana no era parte del Laudo ni tercero a su respecto? En definitiva, ¿cuál es la *causa petendi* de la pretensión de validez del Laudo de 1899 formulada por Guyana?

Si a la carencia de *causa petendi* de la pretensión de Guyana se junta la falta de legitimación sustancial de ésta para ser parte de la controversia sobre el Laudo de 1899 y del proceso judicial abierto para su conocimiento y decisión, procede reconocer que la pretensión declarativa de certeza contenida en la demanda de Guyana es inadmisibles e improcedente.

128.4. La excesiva extensión de este Informe no nos autoriza a desarrollar otras consideraciones, pero nos permitimos abrir un espacio último para advertir que Guyana se propone retrotraer la controversia entre Venezuela y el Reino Unido sobre la frontera entre Venezuela y la colonia de Guayana Británica, prevista y regulada para su resolución en el Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966, al estado en que se encontraba para la fecha de ejecución del Laudo Arbitral del 3 de octubre de 1899; sustituir la controversia regulada sobre la cuestión de la frontera por la controversia no regulada sobre la cuestión de validez del Laudo; retirar de toda consideración de la Corte la solución específica que el Acuerdo de Ginebra consagra expresamente para la controversia sobre la cuestión de la frontera, cual es el “arreglo práctico” previsto en su artículo I y, en definitiva, inutilizar deliberadamente la sustancia del Acuerdo de Ginebra, extrayendo de él únicamente los elementos necesarios, falsos pero necesarios, para dotar de competencia a la Corte y para excluir al Reino Unido de la controversia sobre el Laudo.

128.5. La consideración que antecede hace forzosa la necesidad de que Venezuela reconfigure su defensa de fondo pendiente: por ejemplo,

Venezuela no debe limitarse a impugnar la validez del Laudo de 1899 ni a denunciar la conducta fraudulenta del Reino Unido; debe extender su defensa hacia los hechos impeditivos y extintivos de la pretensión de Guyana; debe centrar su defensa en la arbitrariedad del Laudo; debe, sin duda alguna, oponer reconvencción; la reconvencción debe estar dirigida contra Guyana y contra el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte; en reacción a la petición de Guyana de que la Corte confirme la validez del Laudo, la reconvencción de Venezuela debe estar dirigida a pedir que la Corte confirme la validez del Acuerdo de Ginebra; en reacción a la petición de Guyana de que la Corte confirme el efecto vinculante del Laudo, la reconvencción de Venezuela debe estar dirigida a pedir que la Corte confirme el efecto vinculante del Acuerdo y, de estimarlo conveniente, manifestar a la Corte la disposición de Venezuela de respetar la previsión del Acuerdo de Ginebra según la cual la controversia debe ser resuelta mediante un “arreglo práctico”, en forma que resulte aceptable para ambas partes.

Moisés Troconis Villarreal
Junio de 2023

BIBLIOGRAFÍA

- INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE, Application Instituting Proceedings, *Guyana v. Venezuela*, N. 171, 2018.
 _____, Judgment of 18 December 2020.
 _____, Preliminary Objections to the Admissibility of the Application
 _____, Written Observations of Guyana on Venezuela’s Preliminary Objections.
 _____, Judgment of 6 April 2023.
 _____, Practice Directions.
 _____, Rules of Court (1978).
 _____, Statute of the International Court of Justice.
- UNITED NATIONS, Acuerdo para resolver la controversia entre Venezuela y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre la frontera entre Venezuela y Guayana Británica, N. 8192, Treaty Series, 1966.
 _____, Charter of the United Nations, 26 de junio de 1945.